

LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS DE COLOMBIA

Informe sobre América Latina N°20 – 10 de mayo de 2007

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES	i
I. INTRODUCCIÓN	1
II. ¿MÁS QUE BANDAS CRIMINALES?	2
A. LAS AUC COMO PREDECESORAS.....	3
B. LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES	7
III. ESTUDIOS DE CASOS	9
A. NORTE DE SANTANDER	9
1. Historia de las AUC en la región	9
2. Presencia de nuevos grupos armados ilegales y organizaciones criminales	10
3. Dinámica del conflicto.....	11
4. Conclusión	12
B. NARIÑO	12
1. Historia de las AUC en la región	12
2. Presencia de nuevos grupos armados ilegales y organizaciones criminales	13
3. Dinámica del conflicto.....	14
4. Conclusión	15
C. COSTA ATLÁNTICA.....	15
1. Historia de las AUC en la región	15
2. Presencia de nuevos grupos armados ilegales y organizaciones criminales.....	16
3. Dinámica del conflicto.....	18
4. Conclusión	19
D. MEDELLÍN	20
1. Historia de las AUC en la ciudad.....	20
2. Presencia de nuevos grupos armados ilegales y organizaciones criminales.....	21
3. Dinámica del conflicto.....	21
4. Conclusión	22
IV. RESPUESTA ESTATAL	22
A. POLÍTICA DE SEGURIDAD.....	22
B. JUSTICIA	24
C. DE LA REINserCIÓN A LA REINTEGRACIÓN.....	25
D. PELIGROS FUTUROS.....	28
V. CONCLUSIÓN	30
ANEXOS	
A. MAPA DE COLOMBIA CON ZONAS DE ACTIVIDAD DE NUEVOS GRUPOS	32

LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS DE COLOMBIA

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

El desmantelamiento del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 2003 y el 2006 es percibido por el gobierno del presidente Álvaro Uribe como un paso decisivo hacia la paz. Aunque el hecho de haber sacado del conflicto a cerca de 32.000 miembros de las AUC ha alterado sin duda el panorama de la violencia, existe evidencia cada vez más fuerte del surgimiento de nuevos grupos armados que son más que las simples “bandas criminales” que contempla el gobierno. Algunos de ellos se comportan cada vez más como la nueva generación de paramilitares, y exigen una respuesta más inmediata e integral por parte del gobierno.

Desde comienzos del 2006, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), grupos defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han advertido insistentemente sobre el rearme de unidades paramilitares desmovilizadas, la persistencia de grupos que no se desmovilizaron porque no participaron en las negociaciones entre el gobierno y las AUC, y la fusión de ex paramilitares con poderosas organizaciones criminales, a menudo profundamente implicadas en el tráfico de drogas. Peor aún, existen indicios de que algunos de los nuevos grupos y organizaciones criminales han establecido relaciones comerciales en torno al narcotráfico con elementos de los grupos insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al mismo tiempo, el plan del gobierno para la reintegración de los paramilitares desmovilizados ha dejado ver profundas fallas.

Estas señales de alerta se deben tomar en serio, pues en estos momentos existen las condiciones para la continuación o el resurgimiento ya sea de grupos paramilitares como los tradicionales, o de una federación de nuevos grupos y organizaciones criminales apoyados en el narcotráfico. Los combates militares con las FARC y el más pequeño ELN no cesan, y el tráfico de drogas no ha disminuido. Las cuantiosas sumas de dinero ilícito que produce el narcotráfico ayudan a alimentar el conflicto de varias décadas de duración, afectan la reintegración de los ex combatientes a la sociedad y fomentan la formación y el fortalecimiento de nuevos grupos armados, como sucedió con las AUC y las FARC hace más de un decenio.

Estos nuevos grupos todavía no cuentan con la organización, la cobertura y el poder de las AUC. No se sabe a ciencia cierta cuántos suman, pero incluso el cálculo más bajo –de la policía y la misión de la OEA– de cerca de 3.000 combatientes es preocupante, aunque algunas organizaciones de la sociedad civil llegan hasta triplicar esta cifra. Algunos de estos grupos, como la Organización Nueva Generación (ONG) en Nariño, han empezado a operar de modo muy similar al de los antiguos bloques de las AUC en la región, realizando, entre otras, operaciones de contrainsurgencia y buscando controlar territorio y población para dominar el negocio del narcotráfico. Otros, como las Águilas Negras en Norte de Santander, son menos visibles, y compiten y colaboran a la vez con redes criminales establecidas en la frontera con Venezuela.

La respuesta del gobierno a esta amenaza ha sido insuficiente, pues se ha limitado a tratarla como un asunto de orden público cuya responsabilidad compete sobre todo a la policía; que ha instituido un plan especial y un “bloque de búsqueda” especial para tratar con lo que denomina genéricamente como “bandas criminales”. Esto no ha impedido, sin embargo, la propagación de los grupos por todo el país. En algunas regiones las fuerzas de seguridad no cooperan unas con otras y su compromiso en la lucha contra los nuevos grupos es bajo. Las instituciones judiciales, en especial la Fiscalía General de la Nación, muchas veces no pueden investigar porque carecen de recursos y no cuentan con la ayuda de las fuerzas de seguridad, pero también porque están intimidadas. El programa de reintegración para ex combatientes está siendo reestructurado con miras a superar problemas serios, pero el tiempo trabaja en su contra.

Para derrotar a estos grupos y organizaciones criminales emergentes se requiere de una nueva estrategia integral. Es necesario combinar una inteligencia sólida y medidas de orden público más efectivas con medidas de carácter militar, respetando siempre los derechos humanos y complementando estas políticas con un mejoramiento en la forma como se reincorporan los combatientes desmovilizados a la sociedad, lo cual incluye un ambicioso programa nacional de desarrollo e

infraestructura rural. Esta estrategia se debe concentrar inicialmente en las regiones en donde el dominio paramilitar ha cesado pero que son objetivo tanto de los nuevos grupos como de las FARC. El mantenimiento de las condiciones de seguridad en estas áreas depende tanto de una presencia policial y militar permanente y efectiva como del suministro de beneficios y servicios económicos tangibles a las comunidades locales.

RECOMENDACIONES

Al gobierno de Colombia:

1. Adoptar una estrategia integral para combatir a los grupos armados emergentes y organizaciones criminales, que incluya:
 - (a) un mejor trabajo de inteligencia y medidas de orden público más efectivas, como la conformación de “bloques de búsqueda” especiales adicionales, así como una mayor presencia de la policía en todas las regiones afectadas, sobre todo a lo largo de las fronteras;
 - (b) acción inmediata para confrontar a los grupos emergentes tan pronto como sean detectados por la Defensoría del Pueblo o por la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA (MAPP/OEA);
 - (c) una acción militar más decidida contra los nuevos grupos armados cuando operan en unidades más grandes que presentan blancos visibles;
 - (d) fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de justicia, en especial proveyendo a la Fiscalía General de más investigadores, fiscales y sistemas de computación y telecomunicaciones seguros con el fin de investigar los crímenes cometidos por los nuevos grupos armados y organizaciones criminales; y
 - (e) una mayor cooperación con grupos comunitarios y de la sociedad civil, en especial con los grupos de mujeres, para obtener información sobre sus preocupaciones y prioridades en materia de seguridad.
2. Reducir el riesgo de que los combatientes desmovilizados reanuden sus actividades delictivas o sean reclutados por los nuevos grupos armados ilegales mediante:
 - (a) la rápida conclusión de la reestructuración del programa para su reintegración a la sociedad, y el mejoramiento de la

coordinación de los organismos de orden público con el programa; y

- (b) la implementación, con la participación de grupos de mujeres, indígenas, población afrocolombiana y otros grupos vulnerables en las zonas antes dominadas por los paramilitares, de una estrategia de desarrollo y gobernabilidad rural, con el fin de reducir la pobreza local y fortalecer el orden público, la infraestructura económica y los servicios comunitarios.

3. Poner en práctica medidas más efectivas para proteger a los testigos y víctimas que testifiquen en contra de líderes paramilitares de conformidad con la Ley de Justicia y Paz (LJP) e investigar todas las acusaciones de delitos sexuales y de género cometidos por paramilitares que se hayan acogido a la protección de la LJP, pues las sentencias de quienes han sido condenados por estos delitos no se pueden reducir bajo dicha ley.
4. Implementar, como parte del plan del Ministerio del Interior y de Justicia para evitar irregularidades en las elecciones departamentales y municipales de octubre de 2007, medidas para impedir la interferencia de los nuevos grupos armados y otras organizaciones criminales.

A la policía y las fuerzas armadas:

5. Cooperar de manera estrecha con las instituciones judiciales, en especial con la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, en las investigaciones relacionadas con crímenes cometidos por miembros de nuevos grupos armados y organizaciones criminales.
6. Buscar en los archivos de inteligencia y en las comunicaciones de los comandos militares todo lo relacionado con los 2.695 paramilitares que esperan obtener sentencias reducidas bajo la LJP, y entregar copias de todos los documentos hallados al fiscal general y al procurador general.
7. Investigar las acusaciones de nexos entre personal de seguridad y los nuevos grupos armados y organizaciones criminales y cortar de inmediato cualquier vínculo que hubiere, suspender a los oficiales implicados y entregar la información al fiscal general y el procurador general.
8. Fortalecer la protección a la población civil, incluyendo líderes sindicales y de grupos de mujeres, y evitar, sobre todo en las operaciones contra los nuevos grupos armados y organizaciones criminales, desplazamientos forzosos y la violación de territorios ancestrales de poblaciones indígenas y afrocolombianas.

Al fiscal general, el procurador general y la Corte Suprema de Justicia:

9. Solicitar al Congreso de la República personal y recursos logísticos adicionales y a la rama ejecutiva más cooperación con el fin de facilitar la investigación, el procesamiento judicial y las condenas bajo la LJP, y juzgar a todos los paramilitares desmovilizados que no hayan confesado, de conformidad con dicha ley, crímenes atroces que luego se les comprueben.
10. Coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) un plan para asegurar que los líderes paramilitares detenidos no tengan acceso sin control a teléfonos celulares y otros sistemas de comunicación que les permitan seguir controlando a sus antiguas tropas o establecer contacto con nuevos grupos emergentes.

A la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA):

11. Seguir verificando la reintegración de los combatientes desmovilizados y emitiendo oportunamente alertas tempranas sobre el rearme de grupos paramilitares desmovilizados y el surgimiento de nuevos grupos armados.

A la Unión Europea y la OEA:

12. Preparar misiones de observación, en cooperación con las autoridades colombianas y la sociedad civil, para las elecciones departamentales y municipales que se celebrarán en octubre de 2007.

Al gobierno de Estados Unidos:

13. Seguir condicionando la ayuda a la policía y las fuerzas armadas colombianas a la suspensión de cualquier vínculo con las organizaciones paramilitares, ampliar estas condiciones de modo que incluyan a los nuevos grupos armados al margen de la ley, y comunicarse, cuando estén preparando certificaciones, con las autoridades judiciales independientes de Colombia, así como con el ejecutivo.
14. Ajustar la ayuda de Estados Unidos a un balance 50/50 entre asistencia militar/policial y asistencia económica, judicial, de desarrollo rural y humanitaria para los desplazados, incluyendo atención especial en áreas rurales y con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de mujeres, indígenas y afrocolombianos.

Bogotá/Bruselas, 10 de mayo de 2007

LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS DE COLOMBIA

I. INTRODUCCIÓN

Desde que se inició el desmantelamiento del movimiento paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a fines del 2003, el conflicto armado en Colombia ha experimentado cambios importantes. Junto con la desmovilización de casi 32.000 miembros de las AUC, entre ellos cerca de 2.000 mujeres¹, que el gobierno del presidente Álvaro Uribe y otros han proclamado como un paso importante hacia la pacificación del país, se ha visto claramente el surgimiento de nuevos grupos armados que utilizan nombres como Águilas Negras y Organización Nueva Generación (ONG). Estos grupos, que operan en varias regiones, son fuente de gran preocupación para el gobierno y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), así como para las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Mientras que el gobierno se refiere a ellos como “bandas criminales” y los considera como un asunto de orden público, los grupos de derechos humanos y los centros de investigación colombianos, conjuntamente con algunos observadores internacionales, creen que son la continuación del paramilitarismo bajo otra forma.

No existe consenso en torno a qué sean en realidad los nuevos grupos y hasta qué punto son una continuación de las AUC. Todos ellos participan en algún tipo de actividad delictiva, ya sea narcotráfico o contrabando de gasolina, pero su organización y su modus operandi varían considerablemente de una región a otra. Algunos son liderados por paramilitares que no se desmovilizaron, como Vicente Castaño y Martín Llanos, o se cree que reciben órdenes de jefes de las AUC encarcelados, como “Macaco”; otros son comandados por ex líderes de rango medio de las AUC que retomaron las armas; otros más conforman el ala armada de organizaciones de narcotraficantes que existen desde hace años, o incluso son una combinación de todo esto.

Las estimaciones sobre la cifra total de miembros varían considerablemente, fluctuando entre 3.000 y 9.000.

Lo que es claro es que plantean un serio reto a la política de desmovilización y reintegración del gobierno, constituyen una amenaza para la sociedad colombiana y son un obstáculo para la paz. Uno de los peligros potenciales es que se conforme una federación de nuevos grupos y organizaciones criminales, similar a las AUC, pero que quizás incluya también a algunos elementos de los movimientos insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), que a veces combaten contra los nuevos grupos pero también han establecido negocios de narcotráfico con ellos. Una federación de este tipo se convertiría en un nuevo actor armado importante en el conflicto colombiano.

Aunque el presidente Uribe le asigna prioridad a la lucha contra los nuevos grupos, su propagación no se ha detenido. Las fuerzas de seguridad establecieron un “bloque de búsqueda” en Cúcuta (Norte de Santander), y existe un plan policial para combatir estos grupos. La recientemente lanzada “política de consolidación de la seguridad democrática”, sucesora de la “estrategia de seguridad democrática” del primer mandato de Uribe, busca incrementar la presencia militar y policial en regiones que se encontraban bajo el dominio de las AUC. Pero la estrategia aún no tiene un claro nexo con un importante paquete de inversión rural y gobernabilidad que se pueda implementar tan pronto lo permitan las condiciones de seguridad. Además, Crisis Group observó en varias regiones un bajo nivel de compromiso por parte de las fuerzas de seguridad en la lucha contra los nuevos grupos, en parte porque las FARC constituyen la prioridad pero también porque la corrupción relacionada con droga se está haciendo sentir. Las instituciones judiciales están actuando contra los nuevos grupos y organizaciones criminales y están investigando los nexos entre los paramilitares y las élites políticas locales, pero se debaten entre la escasez de recursos y, en ocasiones, el temor de los funcionarios, quienes se encuentran sometidos a una enorme presión.

Una parte importante de la energía y los recursos gubernamentales disponibles se concentra en el marco de justicia transicional para la desmovilización y reinserción de los grupos armados ilegales, la crucial

¹ Esta cifra de mujeres equivale al 6 por ciento del total de miembros de las AUC desmovilizados. Las mujeres tienen necesidades de reintegración especiales en las cuales los programas de ayuda no se han enfocado lo suficiente. “Foro Desmovilización de las AUC. Altas y bajas del proceso”, INDEPAZ, 2 de agosto de 2006. Véase también la Sección IV C más adelante.

Ley de Justicia y Paz. La estrategia del gobierno se está replanteando con miras a superar problemas anteriores, pero su impacto podría ser limitado, debido a la frustración creciente que se está presentando entre los desmovilizados.

La evidencia recogida por Crisis Group en varias regiones y el análisis que se presenta en este informe sugieren firmemente que la amenaza planteada por los nuevos grupos armados no se podrá controlar si simplemente se les combate como a “bandas criminales”. Se requiere una estrategia integral que pueda responder a su naturaleza diversa y a la variada dinámica de su modus operandi, y que vincule la acción militar y de las fuerzas del orden con un programa de reintegración mejorado. El reto consiste en completar el desmantelamiento de las AUC en medio del conflicto persistente con los insurgentes y de un problema de narcotráfico que no ha cedido.

II. ¿MÁS QUE BANDAS CRIMINALES?

El debate público celebrado en el Congreso sobre el controvertido marco de justicia transicional para la desmovilización y reinserción de los grupos armados al margen de la ley se centró en si el plan del gobierno de Uribe no sólo desmantelaría la estructura militar de los paramilitares sino si también podría poner fin a su influencia penetrante en la sociedad política y económica y cortar sus nexos con el crimen organizado. Según algunos críticos, la LJP de 2005 no logrará este objetivo². Las recientes investigaciones de los medios de comunicación y de la Fiscalía General sobre la infiltración paramilitar en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), así como el fallo de la Corte Constitucional que exige confesiones completas a quienes se acojan a la LJP, han suscitado nuevas preocupaciones. Podría suceder que el ciudadano velo tendido sobre la complicidad oficial con los paramilitares termine por rasgarse.

Además, desde fines del 2005 Colombia también ha presenciado el surgimiento de nuevos grupos armados. La organización no gubernamental Fundación Ideas para la Paz (FIP) fue una de las primeras en advertir sobre el surgimiento de una “tercera generación de paramilitares”³. Se empezaron a publicar artículos sobre nuevos grupos que responden al nombre de Águilas Negras, sobre todo en la prensa regional⁴. Desde entonces, los medios de comunicación, los centros de investigación, las organizaciones de derechos humanos y los observadores internacionales han divulgado un número creciente de testimonios e informes a este respecto.

El sexto informe de la misión de la OEA (MAPP/OEA), en marzo de 2006, puso de relieve los avances logrados en la desmovilización de las AUC, pero también manifestó preocupación con respecto a “(1) el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; (2) reductos que no se han desmovilizado; (3) la aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados”⁵. En dos

² Véase Crisis Group, Informe para América Latina N° 16, *Colombia: ¿Hacia la paz y la justicia?*, 14 de marzo de 2006.

³ “La tercera generación”, Fundación Ideas para la Paz, *Siguiendo el conflicto*, N° 25, 12 de agosto de 2005.

⁴ “Persecución militar y paramilitar contra el campesinado del Catatumbo”, Agencia Prensa Rural, 29 de noviembre de 2005.

⁵ “Sexto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al

informes subsiguientes, la MAPP/OEA identificó un número creciente de actores armados ilegales nuevos o reagrupados en varias regiones⁶.

Algunos analistas, observadores y formuladores de políticas creen que Colombia está presenciando la continuación o el resurgimiento de los grupos paramilitares tradicionales debido a las fallas que han tenido la desmovilización de las AUC y la LJP⁷. Otros, entre ellos el gobierno, perciben a los nuevos grupos como bandas criminales estrechamente relacionadas con la industria ilícita de la droga, o como un hecho casi inevitable del posconflicto⁸. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) del 2006 sobre Colombia se refiere a ellos como “nuevos grupos armados ilegales” y advierte que su “existencia plantea grandes retos para el éxito del proceso de desmovilización y reinserción de los paramilitares y de futuros procesos de paz”⁹. Los expertos en derecho internacional no se ponen de acuerdo sobre si los nuevos grupos, o algunos de ellos, deben ser considerados como actores del conflicto armado¹⁰.

Estas interpretaciones divergentes no sorprenden, dado que ha transcurrido poco tiempo entre la desmovilización de las AUC y la aparición inicial de los nuevos grupos. El asunto es más complejo aún si se tiene en cuenta que algunos de los grupos se han fusionado con organizaciones delictivas existentes. En estos casos, parece ser que las antiguas organizaciones criminales son el elemento dominante. Los nuevos grupos presentan características diferentes dependiendo de la región en donde operan.

Es difícil responder la pregunta sobre cambio y continuidad, en especial porque incluso antes de la

desmovilización de los paramilitares, las AUC y los grupos “independientes” no constituían un único actor. Hasta el momento, un común denominador es que todos los grupos nuevos tienen nexos estrechos con el narcotráfico y con otras redes delictivas. Esto, sin embargo, no los haría muy diferentes de los antiguos paramilitares, como demuestra el siguiente recuento sobre la evolución de las AUC. Lo que parece ser distinto es que no tienen nada que se parezca a una estructura de mando unificada, y ejercen mucho menos control sobre la política y la economía regionales. Tampoco se han aliado con una causa política o ideológica, como la contrainsurgencia. Sin embargo, dada la compleja naturaleza de un conflicto cuyos elementos políticos y criminales están inextricablemente entrelazados¹¹, esto no excluye operaciones de “contrainsurgencia”, incluido el control territorial y poblacional, en la lucha por el dominio de las plantaciones de coca y las rutas del narcotráfico.

A. LAS AUC COMO PREDECESORAS

Los paramilitares no fueron nunca una organización homogénea, sino más bien un matrimonio de intereses entre poderosos caudillos locales, jefes del narcotráfico, crimen organizado, miembros de élites políticas y económicas locales y grupos de contrainsurgencia. Los intentos de unificar a esta multiplicidad de actores bajo un solo mando con identidad política empezaron a comienzos de la década de 1990. Durante los siguientes quince años, la federación paramilitar fue expandiendo masivamente su poder en el país, en todos los sectores de la sociedad.

En 1994, Carlos Castaño fundó las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Durante una sangrienta campaña que le tomó tres años, Castaño estableció el control sobre la región bananera de Urabá (noroccidente de Antioquia). El Frente Sinú de las ACCU, liderado por Salvatore Mancuso¹², continuó la expansión hasta el vecino valle del Alto Sinú, en el departamento de Córdoba¹³.

Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)”, OEA, 1 de marzo de 2006.

⁶ “Séptimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)”, OEA, 30 de agosto de 2006; “Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)”, OEA, 14 de febrero de 2007.

⁷ Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 12 de abril de 2007.

⁸ Alfredo Rangel, “El rearme paramilitar”, *Revista Cambio*, 19 de febrero de 2006.

⁹ “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, ACNUDH, 5 de marzo de 2007.

¹⁰ “Plan integral contra las bandas criminales”, Policía Nacional – Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, documento interno; “Mapa de distribución de los grupos paramilitares en territorio colombiano”, INDEPAZ, Bogotá, 12 de marzo de 2007; Evelin Calderón, “El nuevo escenario paramilitar”, Fundación Seguridad y Democracia, marzo de 2007.

¹¹ Crisis Group, Informe sobre América Latina N° 11, *Guerra y droga en Colombia*, 27 de enero de 2005.

¹² Salvatore Mancuso es miembro de una adinerada familia de inmigrantes italianos, dueños de grandes propiedades dedicadas a la agroindustria y la cría de ganado en el departamento de Córdoba. Después de haber sido secuestrado por el grupo guerrillero EPL, estableció una cooperativa de seguridad y más adelante se convirtió en un alto jefe de las ACCU. Mauricio Romero, *Paramilitares y autodefensas, 1982-2003* (Bogotá, 2003), p. 243.

¹³ Las ACCU cometieron 1.456 asesinatos en 1996 y 808 en 1997. “Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los

La influencia de Castaño sobre los grupos paramilitares creció con sus éxitos contra la guerrilla y sus presuntos colaboradores y le dio la oportunidad de exportar el modelo a otras regiones. En abril de 1997, su reunión con delegaciones de grupos paramilitares que operaban independientemente en otras regiones del país dio origen a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)¹⁴. Esta nueva organización decía tener la misma motivación contrainsurgente y la misma identidad política¹⁵. En esta etapa, las AUC eran un conjunto de grupos armados irregulares que sumaban casi 4.000 combatientes, incluidas unidades militares en zonas rurales, unidades de vigilancia en áreas urbanas y semiurbanas, sicarios, escuadrones de la muerte y elementos de inteligencia y logística. En una segunda cumbre de las AUC, celebrada en mayo de 1998, se tomó la decisión de expandir la influencia territorial de las autodefensas, a la vez que el número de combatientes se incrementó a 6.800¹⁶.

En 1998, Salvatore Mancuso lideró la primera expansión a lo largo de la costa atlántica, llegando hasta la frontera con Venezuela en la región nororiental del Catatumbo (departamento de Norte de Santander), expulsando al ELN y las FARC de varios municipios cocaleros y estableciéndose en Cúcuta, la capital departamental. En 1998 y 1999, las AUC penetraron el valle del Magdalena Medio y el sur del departamento de Bolívar, expulsando al ELN de la ciudad de Barrancabermeja, centro de refinación de petróleo¹⁷. Las protestas patrocinadas por las AUC en el 2001 contra el plan del gobierno de Pastrana de desmilitarizar una zona en la región para la celebración de conversaciones con el ELN pusieron de manifiesto el control de las AUC sobre la zona¹⁸.

políticos”, Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá, febrero de 2007, p. 6.

¹⁴ De las ACCU: Carlos Castaño, César Marín, Santander Lozada y José Alfredo Berrío; de las autodefensas de Puerto Boyacá: César Salazar y “Botalón”; de las autodefensas del Magdalena Medio: Ramón Isaza y el “Teniente González”; de los Llanos Orientales: Humberto Castro y Ulises Mendoza. Edgar Téllez y Jorge Lesmes, *Pacto en la sombra* (Bogotá, 2006), p. 62.

¹⁵ Gustavo Duncan, *Los señores de la guerra*, (Bogotá, 2006), pp. 294-295.

¹⁶ A esta cumbre asistieron las fuerzas de autodefensa de otros departamentos y regiones: Santander, el sur del Cesar, Casanare y Cundinamarca. *Pacto en la sombra, op. cit.*, p. 65.

¹⁷ *Ibid.*, p. 66.

¹⁸ El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y el ELN sostuvieron conversaciones en La Habana desde diciembre del 2000 hasta enero del 2001, donde se acordó la desmilitarización de la región del Magdalena Medio con el fin de iniciar los diálogos de paz. Sin embargo, la resistencia civil impidió que el gobierno procediera con el despeje, y las conversaciones se rompieron a comienzos del 2002.

Aunque sus bastiones se ubicaban en el norte y el centro de Colombia, las AUC también tenían combatientes en los Llanos Orientales y en el sur, a menudo en zonas cocaleras¹⁹. En el 2000 contaban con aproximadamente 8.000 combatientes bien equipados²⁰, y su participación en actividades de narcotráfico era innegable: les estaban confiscando cargamentos de toneladas de cocaína²¹. Se forjaron alianzas con narcotraficantes notorios como Diego Murillo (“Don Berna”)²². Los capos de la droga incluso pagaron grandes sumas para comprar “franquicias” de las AUC, no sólo para ayudarles en sus negocios ilegales sino también para poder formar parte de las negociaciones con el gobierno de Uribe, iniciadas en el 2003²³. En el 2000, Castaño admitió que el 70 por

Francisco Leal, *La seguridad de la inseguridad. Colombia 1958-2005* (Bogotá, 2006), pp. 200-201.

¹⁹ En julio de 1997, las AUC enviaron a hombres fuertemente armados a Mapiripán (Meta), en donde masacraron a 49 campesinos; en noviembre de 1997, las AUC masacraron a quince personas en el distrito de El Aro (municipio de Ituango, Antioquia) y en 1998, a 22 en Puerto Alvira (Meta). El 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado colombiano por su responsabilidad en el caso de Mapiripán, pues halló que miembros de las fuerzas armadas colaboraron con el crimen o por lo menos miraron para otro lado. Las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, de conformidad con la LJP, señalan una colaboración directa por parte de miembros de la fuerza aérea y el ejército. Mancuso también dijo que el finado general Alonso Manosalva ayudó a planear la incursión paramilitar a El Aro, caso en el cual la Corte Interamericana también falló en contra de Colombia, el 1 de julio de 2006. *Pacto en la sombra, op. cit.*, p. 63.

²⁰ Crisis Group, Informe sobre América Latina N° 5, *Colombia: Negociar con los paramilitares*, 16 de septiembre de 2003.

²¹ “Policía colombiana confisca 2,5 toneladas de cocaína”, *El Tiempo*, 19 de agosto de 2000, y “Embajadora de E.U.: ‘Farc y paras operan como nuevos carteles’”, Reuters, 1 de diciembre de 2000.

²² Para mayor información sobre “Don Berna”, véase estudio de caso sobre Medellín.

²³ En la última etapa de expansión antes de las negociaciones con el gobierno de Uribe, las AUC acogieron a narcotraficantes reconocidos, sobre todo del cartel del norte del Valle, como los hermanos Víctor y Miguel Mejía (los “Mellizos”) en Arauca. Víctor Mejía (“Pablo Arauca”) asumió la jefatura del Bloque Vencedores de Arauca, bajo el mando del BCB; Salvatore Mancuso “vendió” el Frente Sur de Bolívar, en la Serranía de San Lucas, una región infestada de cultivos de coca, a narcotraficantes del departamento de Putumayo, quienes lo rebautizaron Bloque Central Bolívar; Gabriel Galindo (“Gordolindo”), pedido en extradición por Estados Unidos desde 1999, asumió el mando del Bloque Pacífico en el Valle y el norte de Cauca; Guillermo Pérez Alzate (“Pablo Sevillano”) recibió el Bloque Libertadores del Sur en Nariño; Miguel Arroyave

ciento de los ingresos de las AUC se derivaba de la droga²⁴. En el 2002, había cerca de 12.000 combatientes en las filas de las AUC²⁵.

El apoderamiento de las AUC por parte de narcotraficantes y las tensiones internas de la organización se hicieron evidentes con la renuncia de Castaño en mayo de 2001²⁶. En septiembre de 2002, Estados Unidos pidió la extradición de Castaño y de Mancuso por el contrabando de diecisiete toneladas de cocaína²⁷. Los casos de cooperación de las AUC con la guerrilla en asuntos de narcotráfico acabaron de desvirtuar del todo la afirmación de las autodefensas de ser básicamente un movimiento contrainsurgente.²⁸

Las AUC también explotaron otras fuentes de ingresos. Ya desde el 2000 era claro que formaban parte del cartel de grupos que perforaban los oleoductos para vender gasolina en el mercado negro. Según la policía, las AUC fueron responsables del 90 por ciento de la gasolina robada, por un valor de US\$106 millones en el 2002 y US\$80 millones en el 2003²⁹. Otra importante fuente de ingresos era la extorsión a empresas y residentes en zonas bajo control paramilitar. Por ejemplo, los mineros de oro en Remedios y Segovia (Antioquia) tenían que pagar más de US\$1 millón al Bloque Central Bolívar (BCB)³⁰. Varias multinacionales, como Chiquita Brands, que hace poco admitió haber pagado cerca de US\$1.7

millones entre 1997 y febrero del 2004 en Urabá y Santa Marta, están siendo investigadas por financiar a los paramilitares³¹.

El poder militar que ejercían las AUC se sumó a la incapacidad del Estado de prestar servicios públicos en algunas zonas rurales y permitió que los paramilitares asumieran el control *de facto* de incluso las economías locales legales³². Los jefes y comandantes de rango medio de las AUC forzaron el desplazamiento de campesinos, compraron tierras a precios irrisorios y acumularon grandes propiedades en lo que se conoció como la “contrarreforma agraria”. Se cree que los paramilitares y los capos del narcotráfico poseen entre cuatro y seis millones de hectáreas de tierras cultivables³³. Por ejemplo, Fredy Rendón (“El Alemán”), comandante del Bloque Elmer Cárdenas, les quitó tierras a afrocolombianos en la cuenca del río Atrato (Chocó) y en Urabá, e invirtió grandes sumas en agroindustrias³⁴.

Junto con la expansión económica criminal, vino la penetración en la vida política. Carlos Castaño tenía un don para las relaciones públicas, y presentaba a las AUC no como vigilantes asesinos sino como un actor legítimo del conflicto: una respuesta natural a los excesos de la guerrilla y el abandono del Estado³⁵. La expansión paramilitar se aceleró durante las conversaciones de paz

obtuvo “franquicias” de las AUC en Meta y Casanare. Véanse “Dinámica reciente del conflicto en el norte del Valle”, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Bogotá, 2006, pp. 26-27; *Pacto en la sombra*, op. cit., p. 97; *Paramilitares y autodefensas, 1982-2003*, op. cit., p. 243; Informe de Crisis Group, *Guerra y droga en Colombia*, op. cit., pp. 16-17.

²⁴ “Las finanzas de los paras”, *Revista Cambio*, 16 de mayo de 2000.

²⁵ Otra incorporación de un narcotraficante que recibió mucha cobertura por parte de los medios de comunicación fue la de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Joseph Contreras, “The Next Escobar?”, *Newsweek*, 21 de mayo de 2001.

²⁶ “Renuncia es división de las Auc”, *El Espectador*, 1 de junio de 2001.

²⁷ “E.U. acusa a Carlos Castaño y Salvatore Mancuso del envío de nueve embarques con 17 toneladas de cocaína”, *El Tiempo*, 28 de septiembre de 2002.

²⁸ Steven Dudley, “Paramilitaries ally with rebels for drug trade”, *Miami Herald*, 25 de noviembre de 2004.

²⁹ Según se afirma, el robo de gasolina aumentó de 443 barriles diarios en 1998 a 1.540 en 1999, 4.514 en 2000, 5.846 en 2001 y 7.270 en 2002, antes de disminuir gradualmente hasta 942 en 2006. Véase “Carta Petrolera”, ECOPEPETROL, ed. N° 108, abril-mayo de 2004. en www.ecopetrol.com.co.

³⁰ “Paras” cobran cada mes \$3.000 millones a 7.000 mineros ilegales en Remedios y Segovia (Antioquia), *El Tiempo*, 5 de abril de 2004.

³¹ Organizaciones de derechos humanos han protestado por la presunta participación de otras multinacionales, como Coca-Cola y Drummond, en la financiación de grupos paramilitares. Chiquita Brands fue multada hace poco por realizar actividades ilegales en Colombia. “Banana ‘para-republic’”, *Semana*, 17 de marzo de 2007.

³² *Los señores de la guerra*, op. cit.

³³ Las estimaciones varían entre seis millones de hectáreas según la Procuraduría General de la Nación, hasta cuatro millones según la Contraloría; la organización no gubernamental CODHES calcula 4.8 millones de hectáreas. Antes de ser asesinado en 2004, el comandante “Rodrigo” del Bloque Metro afirmó en una entrevista que el comandante Ramiro Vanoy (“Cuco”) del Bloque Mineros tenía 250.000 hectáreas, Salvatore Mancuso 60.000 y “Macaco”, el jefe del Bloque Central Bolívar, 30.000 en el valle del Bajo Cauca. *El Tiempo*, 16 de septiembre de 2006.

³⁴ Los combates entre paramilitares e insurgentes expulsaron a grandes grupos de población, entre ellos indígenas y comunidades afrocolombianas, de sus tierras ancestrales. Más de 10.000 hectáreas fueron redistribuidas y revendidas luego a proyectos extensos, en especial plantaciones de palma africana. El gobierno ha identificado el problema y dice que lo rectificará, pero hasta ahora esto no se ha hecho. “Reversazo de Incoder les quitó 10 mil hectáreas a negritudes”, *El Tiempo*, 23 de octubre de 2005; “Puro tilín tilín...”, *Semana*, 24 de marzo de 2007.

³⁵ “Colombia right-wing warlord said U.S. asked for help”, Reuters, 10 de agosto de 2000.

entre el gobierno de Pastrana y las FARC (1999-2002), en la medida en que las AUC se presentaban como el baluarte contra una inminente toma del poder de los insurgentes. Más tarde, durante las negociaciones de los paramilitares con el gobierno de Uribe en Santa Fe de Ralito, manifestaron su deseo de crear un movimiento con capacidad de ejercer control político y social después de la desmovilización. El acuerdo del 2001, revelado hace poco, que firmaron líderes de las AUC y políticos regionales, y la presencia de Ernesto Báez, Salvatore Mancuso y Ramón Isaza en el recinto del Congreso colombiano en el 2004 confirman esta meta.

En ciertas regiones, la intimidación y el control sobre los candidatos locales les permitieron a las AUC hacerse a fondos públicos. La información extraída de un computador portátil que pertenecía a “Don Antonio”, un comandante de rango medio del Bloque Norte (BN), y que fue confiscado por la policía el 11 de marzo de 2006, ayudó a conocer cómo el comandante “Jorge 40” del BN saqueó el presupuesto municipal de Soledad (Atlántico). Varias fuentes le dijeron a Crisis Group que éste tenía nexos con Métodos y Sistemas, una empresa a la que se adjudicó una concesión por veinte años para recaudar impuestos en el distrito de Barranquilla que, según se afirma, produjo US\$17.7 millones entre 2002 y 2006³⁶. Todo parece indicar que “Jorge 40” pudo haberse quedado con hasta la mitad de esa suma³⁷.

No sólo los presupuestos y contratos municipales fueron objeto del saqueo paramilitar. El sistema de salud también sufrió robos sistemáticos. Hubo reportes de robos por más de US\$100 millones únicamente en el departamento del Atlántico³⁸, así como de robos en la mitad de las 48 Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS)³⁹. Las AUC se expandieron a nuevas regiones y nuevos sectores, como las apuestas y la construcción, incluso mientras se realizaban las conversaciones sobre desmovilización con el gobierno de Uribe⁴⁰.

El escándalo de la “parapolítica”, que irrumpió a fines del 2006, comienza a arrojar pruebas contundentes de la

magnitud de la penetración paramilitar en la política⁴¹. Hasta el momento, esto se ha restringido en gran parte a la costa Caribe, pero es probable que en los próximos meses se extienda a departamentos como Antioquia. Cerca de 50 políticos –locales, regionales y nacionales– han sido implicados, entre ellos quince congresistas⁴². El escándalo cobró la carrera política de la ex canciller de Uribe, María Consuelo Araújo, implicó al ex director del DAS, Jorge Noguera, quien fue arrestado por solicitud del fiscal general, y ronda al comandante del ejército, general Mario Montoya⁴³.

Desde el inicio de las conversaciones entre el gobierno y las AUC en el 2003, los jefes paramilitares presionaron para obtener condiciones de desmovilización indulgentes⁴⁴. Algunos grupos abandonaron la mesa o no se presentaron a la ceremonia de desmovilización, como “Martín Llanos” en Casanare y el comandante de rango medio René, quien sigue activo en el suroccidente de Antioquia. En mayo de 2006, la Corte Constitucional zanjó la controversia en torno a la LJP⁴⁵, dándole mayor fuerza a la ley y un mejor equilibrio entre los beneficios para los ex combatientes y el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparaciones⁴⁶. Sin embargo, los jefes

⁴¹ Parapolítica es el término que se utiliza para describir los nexos entre paramilitares y políticos. El escándalo se acentuó a comienzos del 2007 cuando la Corte Suprema ordenó el arresto de los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, y del representante Eric Morris, por vínculos con grupos paramilitares. Nuevas investigaciones han arrojado pruebas sobre los nexos de un gran número de políticos.

⁴² “Qué dejará el río revuelto de la ‘parapolítica’?”, *El Heraldo*, 1 de abril de 2007.

⁴³ Paul Richter y Greg Miller, “Colombia army chief linked to outlaw militias”, *Los Angeles Times*, 25 de marzo de 2007.

⁴⁴ El gobierno presentó su primer proyecto de ley de “sentencia alternativa” al Congreso en el 2003. Se trataba de una ley mucho más indulgente que la LJP que finalmente se aprobó en junio de 2005. Informe de Crisis Group, *Negociar con los paramilitares*, op. cit.

⁴⁵ Desde el comienzo, este marco legal provocó controversia por parte de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos. Véase Informe de Crisis Group, *¿Hacia la paz y la justicia?*, op. cit.

⁴⁶ El 10 de octubre de 2005, 31 organizaciones de la sociedad civil demandaron la LJP, que había entrado en vigor el 25 de julio de 2005. El 18 de mayo de 2006, la Corte Constitucional declaró exequible el proceso mediante el cual se sancionó la ley, pero modificó algunas de sus disposiciones: los ex combatientes corren el riesgo de perder todos los beneficios acordados por la LJP si no confiesan la totalidad de sus crímenes, no devuelven todos sus bienes de procedencia ilícita y no pagan reparación a las víctimas, incluso con sus bienes legales, y además se les considera responsables de todos los crímenes cometidos por sus bloques. El fallo los responsabiliza por la reparación de las víctimas directamente afectadas por acciones cometidas por sus grupos ilegales, más allá del primer grado de consanguinidad. También reitera la responsabilidad del Estado de garantizar las

³⁶ Con base en una tasa de cambio promedio de 2.590 pesos colombianos por dólar estadounidense en el período 2002-2006.

³⁷ Si esto es cierto, es posible que “Jorge 40” haya tenido acceso a información financiera sobre todos los contribuyentes de Barranquilla. Entrevistas de Crisis Group, Barranquilla, 15-16 de febrero de 2006.

³⁸ “Olla podrida en la salud”, *Revista Cambio*, 5 de septiembre de 2004.

³⁹ “Auc controlan 24 de 48 ARS del país”, *El Colombiano*, 6 de septiembre de 2004.

⁴⁰ “Paramilitares se infiltraron en las economías regionales”, *El Tiempo*, 2 de julio de 2005.

paramilitares desmovilizados amenazaron en varias ocasiones con abandonar el proceso de paz. A la luz de las crecientes críticas de la opinión pública, el 14 de agosto de 2006 Uribe ordenó que el alto mando de las AUC fuera ubicado en reclusión temporal en La Ceja (Antioquia). Algunos de los jefes, entre ellos Vicente Castaño, se negaron a entregarse pues insistieron en que les habían cambiado las posiciones, y conformaron nuevos grupos armados⁴⁷.

B. LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES

Los paramilitares construyeron una base de poder en todos los sectores de la sociedad, tanto legales como ilegales. Los nuevos grupos todavía no tienen este alcance, son más pequeños y menos visibles, pero también son dinámicos en un entorno rápidamente cambiante. En su corta historia, no ha sido inusual que cambien de nombre, peleen con otros grupos emergentes por el control de un territorio estratégico y tengan frecuentes querrelas de liderazgo. Están lejos de tener la presencia que tenían las AUC, que se ubicaban en 711 municipios antes de la desmovilización. El gobierno ha identificado a 22 grupos, no todos los cuales coinciden con los detectados por la OEA⁴⁸, en 102 municipios y dieciséis de los 32 departamentos. La policía calcula sus miembros en ligeramente más de 3.000⁴⁹. Algunos estudios independientes hablan de una cifra mayor, en un caso de 84 grupos con 9.078 miembros⁵⁰ y en otro de 78 grupos con entre 3.500 y 4.500 miembros en 169 municipios, en 38 de los cuales no hubo presencia de las AUC⁵¹.

reparaciones si los bienes de los ex combatientes resultan ser insuficientes, exige que las víctimas tengan acceso pleno a la información durante todo el proceso legal y concede a las autoridades judiciales mayor tiempo para investigar y verificar una confesión. “Sentencia N° C-370/2006”, Corte Constitucional, Bogotá, 18 de mayo de 2006.

⁴⁷ “Jorge 40” se entregó el 4 de septiembre de 2006, tras permanecer dos semanas oculto. Varios jefes paramilitares con órdenes de extradición pendientes siguen libres, como “Los Mellizos” y Vicente Castaño. En un comunicado de prensa, Castaño estableció las condiciones para su entrega, entre ellas la restauración de todas las garantías de la LJP antes del fallo de la Corte Constitucional y sus garantías con respecto a las condiciones de detención en la cárcel. *El Tiempo*, 23 de septiembre de 2006.

⁴⁸ “Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)”, OEA, 14 de febrero de 2007.

⁴⁹ “Plan Integral”, *op. cit.*

⁵⁰ “Mapa de distribución de los grupos paramilitares en territorio colombiano”, INDEPAZ, Bogotá, 12 de marzo de 2007.

⁵¹ Evelin Calderón, “El nuevo escenario paramilitar”, Fundación Seguridad y Democracia, marzo de 2007.

Las autoridades han identificado cuatro regiones en donde la actividad es más evidente. La primera incluye la Guajira, el norte y el sur del Cesar, Magdalena, el sur de Bolívar y Norte de Santander en la región de la costa atlántica; la segunda es Antioquia, en Urabá y el suroccidente; la tercera son los Llanos Orientales, incluidos Casanare, Vichada y Meta; la última es el sureste, que comprende a Nariño, Putumayo, Caquetá, Chocó y Caldas. Estas regiones son epicentros de actividad criminal, cada una con una dinámica específica en relación con el conflicto armado.

No todos los grupos son posteriores a la desmovilización de las AUC. Algunos son bloques de las autodefensas que nunca se incorporaron al proceso de paz⁵² o que se salieron antes o después de la desmovilización⁵³. En los llanos de los departamentos de Meta, Vichada y Casanare, por ejemplo, los paramilitares liderados por “Martín Llanos” y “Cuchillo”, que no participaron en el proceso, se han enfrentado con grupos comandados por Vicente Castaño y Hernán Hernández (hoy bajo custodia policial), que buscan restablecer el control sobre la zona⁵⁴. Otros grupos, que según se ha establecido trabajan con carteles del narcotráfico como el de los Rastrojos, se han expandido en antiguas zonas de las AUC pero tienen una historia propia más larga⁵⁵. Bandas criminales como las Águilas Negras

⁵² Las Autodefensas Campesinas de Casanare, lideradas por Martín Llanos, nunca participaron en el proceso de paz y siguen activas.

⁵³ Individuos como Hernán Hernández (en la actualidad bajo custodia policial) y Vicente Castaño se desmovilizaron pero volvieron a tomar las armas, insistiendo en que el gobierno no había cumplido sus promesas.

⁵⁴ Se cree que Llanos busca recuperar el control sobre el tráfico de precursores químicos que a fines de la década de 1990 controlaba Martín Arroyave, el extinto jefe del Bloque Centauros, que operaba en el departamento del Meta. Presionado por Vicente Castaño y su nuevo grupo armado, es posible que haya buscado activamente una alianza con “Cuchillo”, ex subjefe del Bloque Centauros, quien según se afirma tuvo que ver con la muerte de Arroyave en un intento por apoderarse de parte del negocio de narcotráfico de la región. Los enfrentamientos entre el grupo de Castaño y “Cuchillo” han aumentado desde septiembre de 2006, cuando “Cuchillo” presuntamente ordenó el asesinato de dos mujeres que según se decía eran cercanas a Hernán Hernández en Guamal (Meta). Como represalia, sicarios asesinaron a una mujer presuntamente cercana a “Cuchillo” en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2006. “Guerra entre bandas de paisas y llaneros genera incremento del sicariato en Villavicencio”, *El Tiempo*, 16 de enero de 2007; entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 5 de febrero y 13 de marzo de 2007.

⁵⁵ Dos grupos armados vinculados con el cartel del norte del Valle corresponden a este caso: los “Rastrojos” y los “Machos”, que también han usado los nombres paramilitares de Autodefensas Unidas Campesinas del Norte del Valle (AUCNV) y Rondas Populares Campesinas, respectivamente.

también se están haciendo más visibles con el fin de lograr sus objetivos infundiendo temor en la población.

No obstante, ciertas características tienden a identificar a los distintos grupos. La Organización Nueva Generación (ONG) de Nariño parece haber heredado una estructura más militar de su predecesor, el Bloque Libertadores del Sur (BLS) de las AUC; el Bloque Cacique Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta también está controlando territorio con métodos militares. El grupo dirigido por “Codazzi” en el Magdalena y algunos miembros de la Contrainsurgencia Wayúu⁵⁶, liderada por “Pablo” en la Guajira, parecen haber eludido la desmovilización y conservan la estructura de bloques que tenían bajo el Bloque Norte (BN) de las AUC. Los grupos menos cohesionados no tienen una cadena de mando clara, como sucede con las Águilas Negras en Norte de Santander. Son frecuentes las luchas entre facciones, que solían caracterizar al Bloque Catatumbo de las AUC en Norte de Santander⁵⁷. Los grupos urbanos utilizan estructuras menos compactas para conformar redes económicas ilícitas y cuadrillas de sicarios en Cúcuta, Medellín y Barranquilla.

Todos los nuevos grupos están implicados de una u otra forma en actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando, de modo que buscan ejercer control sobre puertos marítimos y cruces fronterizos poco vigilados, sobre todo con Ecuador y Venezuela. Sin embargo, su relación con el crimen organizado varía según la región. La ONG es relativamente autónoma, capaz tanto de forjar alianzas de narcotráfico como de combatir rivales en su región. Por el contrario, las Águilas Negras de Norte de Santander parecen formar parte de una intrincada red criminal, en la cual a veces libran luchas intestinas por el contrabando. En la Guajira, el nuevo grupo de “Pablo” controla las rutas de contrabando tradicionales. Otros grupos, como el frente Cacique Arhuaco en Magdalena, han reconstruido parte de la antigua estructura criminal del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC. Los Rastrojos son simplemente el ala armada de una facción del cartel de droga del norte del Valle (CNDV) dirigido por Wilber Varela (“Jabón”).

⁵⁶ Los wayúu pertenecen a una etnia indígena que vive en su mayor parte en el departamento nororiental de la Guajira, en Colombia, y en el estado de Zulia, en Venezuela. Según datos del censo realizado en el 2005 en Colombia, cerca de 500.000 habitantes se identifican como wayúu. Se estima que aproximadamente el 45 por ciento de la población de la Guajira es de origen wayúu.

⁵⁷ También se ha observado que la ONG parece tener normas más estrictas con respecto al uso de uniformes de estilo militar, mientras que las Águilas Negras parecen operar casi siempre vestidos de civil. En el Magdalena, se afirma que algunos grupos nuevos operan uniformados.

La ONG ejerce un dominio territorial más definido en municipios como Policarpa y Cumbitara en Nariño, en donde controla y defiende cultivos de coca contra las FARC y el ELN. Las Águilas Negras que operan en Norte de Santander han sido vistas a lo largo de corredores estratégicos, como Cúcuta, Puerto Santander, Banco de Arena, Villa del Rosario, Tibú y Ocaña, pero no se tienen noticias de combates con grupos insurgentes ni de presencia en los altiplanos cocaleros de la región del Catatumbo. En el pasado se han forjado alianzas *ad hoc* para la exportación de drogas, y esta eventualidad no se debe desestimar. Los nuevos grupos de Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta, en la costa atlántica, están presionando a los ex combatientes para que vuelvan a tomar las armas.

En la mayor parte de los casos el control sobre la población civil es velado, aunque en los lugares en donde existe una confrontación abierta con otros grupos armados, en especial los insurgentes, los nuevos grupos y bandas criminales utilizan la intimidación tal como lo hacían anteriormente las AUC. Su influencia en la política todavía no es clara. La alcaldesa de Algarrobo (Magdalena) fue arrestada en compañía de Águilas Negras del Magdalena⁵⁸. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si los nuevos grupos piensan tratar de controlar a los candidatos en las elecciones de octubre de 2007 para alcaldes y gobernadores⁵⁹. El asesinato de Yolanda Izquierdo, representante de las víctimas, en Córdoba, pone de relieve la vulnerabilidad de las víctimas frente a los nuevos grupos. Aunque el ejército y la policía están combatiendo a estos grupos emergentes, los civiles todavía se muestran renuentes a cooperar debido a la percepción de que aún existen nexos entre militares y paramilitares.

⁵⁸ “Alcaldesa del Magdalena y otras ocho personas capturadas en reunión de paramilitares”, Caracol Radio, 20 de diciembre de 2006.

⁵⁹ El Ministerio del Interior y de Justicia lanzó una iniciativa contra irregularidades electorales (“Pacto por la transparencia. ¡A voto limpio!”). Los partidos que participan en este pacto acuerdan: (1) rechazar y denunciar presiones de grupos delictivos; (2) impedir que personas que están siendo investigadas judicialmente presenten sus candidaturas bajo su nombre; (3) abstenerse de apoyar a candidatos sospechosos de pertenecer o estar siendo patrocinados por grupos delictivos; (4) llevar una contabilidad apropiada; (5) mantener información actualizada en sus páginas web; (6) no recibir dinero adicional al que autoriza la ley; (7) pedir a los candidatos jurar ante notario público que no tienen un prontuario delictivo; y (8) ser procesados si violan estos compromisos. La iniciativa también prevé el establecimiento de Comisiones de Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral en cada departamento. Las elecciones deberán ser monitoreadas por una unidad de reacción rápida con participación de las fuerzas armadas, la policía, la registraduría, los ministerios de Defensa y del Interior y de Justicia, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General.

III. ESTUDIOS DE CASOS

A. NORTE DE SANTANDER

1. Historia de las AUC en la región

Las AUC llegaron a Norte de Santander en 1999, no sólo atraídas por las más de 15.000 hectáreas de coca en la región del Catatumbo⁶⁰, sino también con la intención de controlar a Cúcuta y los puntos de cruce de contrabando, como Puerto Santander en la frontera con Venezuela⁶¹. En agosto de 1999, unos 200 paramilitares de Córdoba y Urabá asesinaron a 35 personas en el municipio de Tibú, en el comienzo de una campaña tendiente a reemplazar el dominio insurgente sobre la región⁶². Pero la guerrilla, sobre todo las FARC, les hizo frente y envió tropas adicionales tras haber utilizado el territorio venezolano para reagruparse⁶³. Hacia fines del 2001, las AUC y las FARC tenían un acuerdo tácito de división territorial⁶⁴. La tregua se rompió antes de la desmovilización del Bloque Catatumbo (BC) en diciembre de 2004, cuando en junio las FARC masacraron a 34 recolectores de coca (raspachines) que trabajaban para los paramilitares. Fue el inicio de una campaña exitosa para retomar y mantener la zona de La Gabarra⁶⁵.

La presencia del BC en Norte de Santander se dividió en dos zonas principales, sobre todo en las tierras bajas. Había bloques rurales en Tibú y La Gabarra para controlar territorios y cultivos de droga, y para proteger sus laboratorios y rutas hacia Venezuela. Éstas estaban conectadas por carretera con Puerto Santander (un centro y campo de entrenamiento paramilitar), y desde allí con Cúcuta⁶⁶. En Cúcuta y sus alrededores se había

forjado una alianza con sofisticadas redes criminales de la región, que contaban con el apoyo de políticos locales. Los paramilitares prestaban su fuerza a estas redes y lograron expulsar a los operadores más pequeños, con lo cual establecieron un monopolio sobre el tráfico de drogas y otros tipos de contrabando⁶⁷. Varios delincuentes de poca monta fueron asesinados cuando trataban de sacar mercancía de contrabando sin pagarles a los paramilitares. Las redes urbanas utilizaban a conductores de taxis, tenderos y, sobre todo, vigilantes privados para controlar ciertos vecindarios, en especial los más pobres (las comunas), y para recoger información de inteligencia⁶⁸.

Antes de la desmovilización surgieron diferencias en el seno del BC, presuntamente entre una facción totalmente dedicada al narcotráfico y otra que mantenía algo de barniz ideológico⁶⁹. Uno de los líderes, Carlos Enrique Rojas Mora (“El Gato”), fue asesinado en octubre de 2004. Sin embargo, también parecía haber intereses rivales dentro del Bloque Norte (BN) por el control de Norte de Santander. Aunque Salvatore Mancuso estaba al mando y llegaba con frecuencia en helicóptero a Cúcuta, en donde le daban tratamiento real, la evidencia sugiere que antes de la desmovilización “Jorge 40” hizo sentir su presencia en Ocaña, una ciudad que se encuentra sobre la ruta hacia la costa Caribe. Algunos analistas han planteado que también buscaba droga en la región del Catatumbo, que quería transportar por sus rutas establecidas de la costa. Confirió las operaciones a su lugarteniente, “Omega”, quien tenía nexos con narcotraficantes poderosos⁷⁰.

La primera desmovilización de las AUC, que comprendió a más de 1.000 combatientes, fue la del BC en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, el 10 de diciembre de 2004, cuando 1.437 miembros del Bloque Móvil Catatumbo y el Frente La Gabarra del BN entregaron las armas bajo el liderazgo de Mancuso.

⁶⁰ Cifras de la Dirección Nacional de Estupeficientes calculaban 15.039 hectáreas de cultivos de coca en la región del Catatumbo en 1999. “Una mirada al Catatumbo”, Gobernación de Norte de Santander, 27 de agosto de 2004. La oficina contra la droga de las Naciones Unidas tiene un estimativo similar sobre los cultivos de coca en Norte de Santander en 1999. “Colombia, Coca Cultivation Survey”, UNODC, junio de 2006.

⁶¹ Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 5 de febrero de 2007.

⁶² La presencia del ELN en esa región data de mediados de la década de 1970; las FARC llegaron hacia fines de los años ochenta. Véase “Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo”, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, agosto de 2006.

⁶³ Entrevista de Crisis Group, Cúcuta, 21 de febrero de 2007.

⁶⁴ “La desmovilización del Bloque Catatumbo”, Fundación Seguridad y Democracia, noviembre de 2004.

⁶⁵ Entrevistas de Crisis Group, Cúcuta, 20-21 de febrero de 2007.

⁶⁶ Entre 2001 y 2003, grupos paramilitares también penetraron zonas medias y altas, como Convención, Teorema, Hacarí y

San Calixto, a donde los insurgentes habían trasladado sus operaciones.

⁶⁷ Los paramilitares urbanos establecieron operaciones de extorsión (“protección”), comercio de vehículos robados de Venezuela y lavado de dinero, y también de narcotráfico. Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 5 de febrero de 2007, Cúcuta, 19 de febrero.

⁶⁸ “Infiltración de Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en empresas ilegales de vigilancia de Cúcuta”, *El Tiempo*, 17 de octubre 2004.

⁶⁹ “La desmovilización del Bloque Catatumbo”, Fundación Seguridad y Democracia, noviembre de 2004.

⁷⁰ Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 5 de febrero de 2007.

2. Presencia de nuevos grupos armados ilegales y organizaciones criminales

Las fuerzas de seguridad sólo mencionan a algunos grupos de Águilas Negras como nuevos en la región. Han sido detectados en Cúcuta, Puerto Santander, Banco de Arena, Villa del Rosario, Tibú y Ocaña. El gobierno calcula que hay menos de 200, en especial células de las AUC que no se desmovilizaron y mantuvieron sus armas y una estructura mínima⁷¹. Esto es casi con seguridad una subestimación numérica, no sólo de las Águilas Negras sino de otros grupos que operan en Cúcuta y sus alrededores⁷². Los grupos de derechos humanos de la región estiman la membresía de los nuevos grupos armados en cerca de 800⁷³. Las Águilas Negras parecen dedicarse exclusivamente a proteger el negocio de la droga: centros para la compra de base de coca, laboratorios y rutas. Aunque el nombre Águilas Negras está siendo utilizado por muchos grupos nuevos en distintas regiones del país, en Norte de Santander existe evidencia de que varios grupos que responden a ese nombre han estado trabajando juntos.

En su investigación, Crisis Group identificó a tres líderes de estas Águilas Negras, todos ex miembros de las AUC. Desde entonces dos de ellos han muerto y el otro se encuentra detenido. Máximo Cuesta Velandia (“Sinaí”) era un comandante del BC que no se desmovilizó y estableció su operación en Puerto Santander, antiguo bastión de las AUC. Según se afirma, se dedicó al narcotráfico e incluso compró droga a las FARC. En una lucha de poder en Cúcuta, Adrián de Jesús Mesa (“Camilo”), también del BC, venció a bandas criminales pequeñas y medianas y trató de restablecer el control sobre el contrabando procedente de Venezuela, incluido el de gasolina⁷⁴. Jhon Palma, del Bloque Norte (BN), concentró sus operaciones en Ocaña, desde marzo de 2005. Su intención era conseguir base de coca en el Catatumbo y llevarla hasta la costa Caribe. Según parece, los tres tenían contactos con “Omega”⁷⁵.

La red fue dismantelada pronto por uno o varios otros grupos, a partir de noviembre de 2006, cuando “Omega” fue asesinado en Medellín y Jhon Palma cayó abatido en Ocaña. En diciembre de 2006, otro líder de las Águilas Negras, “Camilo”, fue asesinado en Ureña, una ciudad fronteriza venezolana, y el ejército capturó a “Sinaí”. Es posible que también haya estado relacionado con la purga el asesinato en Cúcuta de un conocido miembro del bajo mundo, José Orlando Velásquez (“Surca”), en febrero de 2007⁷⁶. Miembros desmovilizados del BC dicen haberse visto envueltos en peleas, ya sea por estar vinculados con una facción o por intentar reactivarla⁷⁷.

No es claro quién estaba exactamente detrás de todo esto, o si los asesinatos estaban relacionados, aunque esto parece probable. Fuentes judiciales y de las fuerzas de seguridad le dijeron a Crisis Group que antiguos miembros del Bloque Central Bolívar (BCB), del sur de Bolívar y de Caucasia, en el norte de Antioquia, habían tenido que ver con los asesinatos, y que el responsable era el ex comandante del BCB Carlos Mario Jiménez (“Macaco”), quien en la actualidad se encuentra recluido en una cárcel de Itagüí con otros jefes desmovilizados de las AUC⁷⁸. La Fiscalía está investigando a “Macaco” por posibles vínculos con las Águilas Negras en Norte de Santander⁷⁹. También se ha reportado que Vicente Castaño ha estado reclutando hasta 200 hombres con el fin de retomar antiguos feudos del BC entre El Tarra y La Gabarra, a donde han regresado las FARC⁸⁰.

Según investigaciones de Crisis Group, las cuotas que se solían pagar por protección paramilitar se siguen cobrando en Cúcuta, pero ahora son los nuevos grupos los que las exigen⁸¹. Por lo menos dos grupos en Cúcuta están implicados en operaciones de extorsión, contrabando y tráfico de drogas: los “Boyacos” y los “Pepes”, que se han convertido en la élite del narcotráfico tras la desmovilización del BC⁸². Existen

⁷¹ Entrevista de Crisis Group, Cúcuta, 21 de febrero de 2007.

⁷² Entrevistas de Crisis Group, Cúcuta, 21-22 de febrero de 2007.

⁷³ Elizabeth Yarce, “Los secretos del nido de las Águilas Negras”, *El Colombiano*, 14 de enero de 2007.

⁷⁴ Algunas fuentes también han dicho que el ex jefe del Bloque La Gabarra, del BC, Armando Pérez Betancourt, “Camilo”, estaría en la frontera venezolana buscando restablecer un grupo armado en colaboración con Vicente Castaño. “Águilas Negras coordinan delitos cometidos desde Venezuela, denuncian en la frontera”, *El Tiempo*, 13 de abril de 2007; entrevistas de Crisis Group, Cúcuta, 20-21 de febrero de 2007.

⁷⁵ Carlos Eduardo Huertas, “El nido de Las Águilas”, *Semana*, 10 de febrero de 2007; entrevista de Crisis Group, Cúcuta, 21 de febrero de 2007.

⁷⁶ “El nido de Las Águilas”, *op. cit.*

⁷⁷ Elizabeth Yarce, “Los secretos del nido de las Águilas Negras”, *El Colombiano*, 14 de enero de 2007.

⁷⁸ “El nido de Las Águilas”, *op. cit.*; entrevistas de Crisis Group, Cúcuta, 21 de febrero de 2007, Bogotá, 5 y 13 de febrero.

⁷⁹ Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 13 de marzo de 2007.

⁸⁰ Entrevista de Crisis Group, Cúcuta, 21 de febrero de 2007.

⁸¹ Entrevistas revelaron una elaborada escala de cobros hechos a los residentes de muchos barrios. Según el tamaño de la casa, se cobra el equivalente de entre US\$0.50 y US\$1.50 semanales. Los predios comerciales pagan mucho más, dependiendo de las ganancias. El recaudo a menudo lo hacen empresas de seguridad privadas establecidas por las AUC. Entrevistas de Crisis Group, Cúcuta, 19 y 21 de febrero de 2007.

⁸² Según algunas fuentes, los Boyacos y los Pepes podrían tener vínculos con el Cartel del Norte del Valle. Es posible que

reportes de una “oficina de sicarios” (denominada *oficina de cobro* en la jerga criminal colombiana)⁸³ en el municipio de Cúcuta, dirigidas desde Juan Frío⁸⁴. Fuentes en Cúcuta dijeron que los nuevos grupos en este sector también operan un servicio de cobro de deudas, por el cual exigen el 30 por ciento. Se cree que los tres grupos tienen nexos con las Águilas Negras y que están detrás de algunas de las más grandes operaciones de lavado de activos en Cúcuta, que incluyen clubes nocturnos y centros comerciales⁸⁵.

3. Dinámica del conflicto

El departamento de Norte de Santander es la principal ruta de drogas con destino a Venezuela, de donde se envían en tránsito al Caribe y luego se embarcan hacia Estados Unidos en avionetas, lanchas rápidas o vuelos comerciales; o hacia Europa, un mercado más lucrativo con precios más altos y un riesgo mucho menor de extradición⁸⁶. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reportó 159 vuelos en el 2006 desde Venezuela y Colombia hacia el Caribe, entre ellos 46 a Haití y 79 a República Dominicana, con cerca de 55 toneladas métricas en tránsito por esos dos países únicamente⁸⁷. Debido a la presión cada vez mayor que se ejerce sobre los narcotraficantes en Colombia, algunas organizaciones están estableciendo bases en Venezuela, presuntamente con la ayuda de elementos corruptos de las fuerzas de seguridad de dicho país, en especial la Guardia Nacional, incluido el denominado

los Boyacos hayan mantenido nexos comerciales en La Gabarra, incluso después de que las FARC retomaron la región. Entrevista de Crisis Group, Cúcuta, 21 de febrero de 2007; Alejandro Reyes, Francisco Thoumi y Liliana Duica, “El narcotráfico en las relaciones fronterizas de Colombia”, Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito, Universidad del Rosario, mayo de 2006.

⁸³ Estas son instituciones inicialmente establecidas en Medellín y Envigado para mediar en disputas entre narcotraficantes, por ejemplo después de la pérdida de un embarque de droga, cuando se asignan responsabilidades. Terminaron prestando servicios de asesinato, organizando grupos delictivos de protección y encargándose de recaudos. Entrevistas de Crisis Group, Envigado, 14 de febrero de 2007.

⁸⁴ Entrevistas de Crisis Group, Cúcuta, 19 de febrero de 2007, Juan Frío, 22 de febrero.

⁸⁵ Entrevistas de Crisis Group, Cúcuta, 20-21 de febrero de 2007.

⁸⁶ Según le informaron a Crisis Group agentes del orden de varios países, se cree que por lo menos 200 toneladas de cocaína pasan anualmente por Norte de Santander, y que los narcotraficantes colombianos están mirando cada vez más hacia Europa. Entrevistas de Crisis Group, Caracas, 23 de octubre de 2006 y 2 de febrero de 2007, Bogotá, 16 de marzo.

⁸⁷ “International Narcotics Control Strategy Report, 2007”, Departamento de Estado de los Estados Unidos, en www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2007/vol1/html/80857.htm.

“Cartel de los Soles”, en alusión a los soles dorados que portan los generales de esa institución⁸⁸.

Las drogas no son la única mercancía de contrabando que atraviesa la frontera venezolana. El gobierno del presidente Hugo Chávez estableció controles de precios a los alimentos básicos, la gasolina está muy subsidiada y existe un estricto control de cambios⁸⁹. Esto presenta oportunidades para que prosperen los delincuentes y criminales de Norte de Santander. Se cree que el comercio de gasolina procedente de Venezuela está en manos de nuevos grupos que trabajan en asocio con miembros de la Guardia Nacional venezolana. Anteriormente las AUC monitoreaban este comercio y exigían su parte a los contrabandistas. El sistema sigue intacto, pero ahora nuevos grupos y organizaciones criminales son los que sobornan a la policía y a los agentes de aduana⁹⁰.

Las numerosas casas de cambio que hay en Cúcuta ofrecen bolívares a un precio casi dos tercios por debajo de la tasa oficial⁹¹. Esto, unido a la necesidad de lavar dinero del narcotráfico, ha incrementado enormemente el contrabando de mercancías de Venezuela que se venden baratas en Colombia como parte de la industria del contrabando conocida como los “San Andresitos”⁹².

Si bien las FARC rompieron el acuerdo territorial con las AUC y están restableciendo el control sobre gran parte de la producción de coca, no se han reportado enfrentamientos con las Águilas Negras. De hecho, fuentes dijeron que nuevos grupos, entre ellos las Águilas Negras, están comprando base de coca a la guerrilla,

⁸⁸ Entrevista de Crisis Group, Cúcuta, 21 de febrero de 2007; “Rasguño reveló qué está dispuesto a contarle a la justicia y qué guarda en su computador personal”, *El Tiempo*, 22 de marzo de 2007.

⁸⁹ Véase Crisis Group, Informe sobre América Latina N°19, *Venezuela: La revolución de Hugo Chávez*, 22 de febrero de 2007.

⁹⁰ Flotas de viejos automóviles norteamericanos, muy apreciados por sus enormes tanques de combustible, atraviesan constantemente la frontera para llenar los tanques de gasolina en Venezuela y vaciar el contenido en bidones plásticos en Colombia, que luego se venden a lo largo de la carretera. También se evidencia fácilmente un comercio paralelo, en el que bicicletas atraviesan la frontera por el lecho seco del río llevando bidones de gasolina. Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 4 de febrero de 2007, y en cruces fronterizos hacia Venezuela, 22 de febrero.

⁹¹ La tasa oficial está ligeramente por debajo de 2.200 por dólar estadounidense. En Cúcuta, la tasa de cambio superaba los 3.700 por dólar.

⁹² Estos mercados se denominan “San Andresitos”, por la isla caribeña de San Andrés, que fue declarada puerto libre en la década de 1950 y se convirtió en puerto de tránsito de mercancía de contrabando para Colombia.

sobre todo a “Megateo”⁹³, un ex miembro de una facción disidente del Ejército Popular de Liberación (EPL), desmovilizado a comienzos de los años noventa, y que ahora trabaja con las FARC.

Un estudio realizado por una organización no gubernamental colombiana relaciona a muchos políticos con los antiguos paramilitares. La penetración de las AUC en la estructura política del departamento fue muy profunda, al igual que en los departamentos de la costa atlántica en donde operaba el BN⁹⁴. El alcalde de Cúcuta fue investigado, pero no se formularon cargos en su contra⁹⁵. Los grupos de derechos humanos y los líderes comunitarios temen que las cooperativas privadas de guardias de seguridad en las comunas (barriadas pobres) se utilicen para presionar a los residentes para que voten por candidatos específicos en las elecciones regionales del 2007⁹⁶. También parece seguir existiendo penetración de instituciones locales y de las fuerzas de seguridad.

Crisis Group se enteró de varios casos, uno de los cuales fue el de un paramilitar desmovilizado que se quejó de la presión que estaba ejerciendo sobre él un grupo armado para que se incorporara, y fue asesinado 30 minutos después de salir del edificio de la Fiscalía en Cúcuta. Otra fuente dijo que miembros de las fuerzas de seguridad asesinaban a combatientes desmovilizados que trabajaban como informantes con el fin de reclamar dineros de recompensa⁹⁷. Estos indicios de corrupción e infiltración disminuyen la ya de por sí menguada confianza de los ciudadanos en las instituciones departamentales y no sólo hacen que la gente se muestre renuente a presentar reclamos y cooperar con las fuerzas de seguridad, sino que también infunden temor en las víctimas, por lo cual no se atreven a presentar casos ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) contra los autores de los crímenes y delitos.

4. Conclusión

El departamento de Norte de Santander, con su posición estratégica a lo largo de la frontera venezolana, su falta de infraestructura y sus abundantes cultivos de droga, es una región que atrae naturalmente a elementos delictivos

y criminales. La guerrilla ingresó en los años setenta y las AUC a fines de los noventa. Las actividades ilícitas de las AUC –narcotráfico, extorsión, lavado de activos y contrabando– siguen, con los nuevos grupos, en manos de organizaciones criminales, que han retomado el negocio en donde lo dejaron las autodefensas. Se han dado las peleas usuales entre el bajo mundo por el control de estos negocios ilícitos, pero el rasgo distintivo en el departamento de Norte de Santander es el nivel de organización y colaboración entre los grupos armados y criminales. La afirmación de que jefes de las AUC dirigen las operaciones desde la cárcel de Itagüí y buscan recuperar el control regional hace pensar que se cierne una gran amenaza sobre la región, así como el posible retorno de una penetración política y social similar a la de las autodefensas.

B. NARIÑO

1. Historia de las AUC en la región

En el 2000, el Bloque Central Bolívar (BCB) fundó el Bloque Libertadores del Sur (BLS) en el puerto de Tumaco, sobre el Océano Pacífico. En el 2001 el bloque ya se había expandido hacia el interior hasta Llorente⁹⁸, y había señales de actividad en Pasto, la capital departamental⁹⁹. Hubo combates con el Frente 29 de las FARC y con su columna móvil Daniel Aldana (todavía en la región), cuando los paramilitares entraron tras la ofensiva “Tsunami” del gobierno, en mayo de 2001, contra las FARC en Barbacoas¹⁰⁰. Las operaciones de contrainsurgencia del BLS tuvieron su punto más alto en el 2003¹⁰¹ pero disminuyeron cuando el bloque asumió el control sobre zonas clave, en especial a lo largo de la costa y de los ríos Mira, Patía, Tapaje y Telembí. Las AUC estaban presentes en los pueblos a lo largo de la autopista Pasto-Tumaco, y durante tres años su principal base estuvo en Junín¹⁰², casi exactamente en el lugar en donde las fuerzas de seguridad tienen ahora un puesto de control.

El BLS estaba liderado por Guillermo Pérez Alzate (“Pablo Sevillano”), un conocido narcotraficante que según se afirma se inició con el Cartel del Norte del Valle (CNDV). Se dice que él fue uno de los que

⁹³ “Megateo”, cuyo nombre según se cree es Ramón Navarro, fue jefe de finanzas del Frente “Libardo Mora Toro” del EPL. Véase “El DAS iba por alias ‘Megateo’”, *Vanguardia Liberal*, 25 de abril de 2006.

⁹⁴ “Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos”, Corporación Nuevo Arco Iris, febrero de 2007; “Norte de Santander, uno de los departamentos de mayor control ‘para’”, *La Opinión*, 20 de febrero de 2007.

⁹⁵ Entrevistas de Crisis Group, Cúcuta, 19 de febrero de 2007; “Con esos amigos...”, *Revista Cambio*, 23 de mayo de 2004.

⁹⁶ Entrevistas de Crisis Group, Cúcuta, 20 de febrero de 2007.

⁹⁷ Entrevistas de Crisis Group, Cúcuta, 19 de febrero de 2007.

⁹⁸ Germán Jiménez, “Llorente, nuevo campo de batalla”, *El Espectador*, 1 de abril de 2001.

⁹⁹ “Golpe a las AUC”, *Revista Cambio*, 1 de abril de 2001.

¹⁰⁰ “Ejército recuperó Barbacoas”, *El Tiempo*, 25 de mayo de 2001.

¹⁰¹ “Los derechos humanos en Nariño”, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2004.

¹⁰² Entrevista de Crisis Group, Ricaurte, 27 de febrero de 2007.

compraron una “franquicia” a las AUC durante las negociaciones con el gobierno de Uribe, así como el derecho de operar en Nariño¹⁰³.

El 30 de julio de 2005, 689 miembros del BLS se desmovilizaron en el sector montañoso de Taminango, al nororiente de Nariño. Sus tres frentes¹⁰⁴ entregaron 596 armas. La desmovilización precedió al desmantelamiento del poderoso BCB, liderado por Carlos Mario Jiménez (“Macaco”). Fuentes locales afirman que el BLS no se desmovilizó del todo y que las redes paramilitares siguen intactas, aunque con menos integrantes y con un perfil mucho más bajo¹⁰⁵. Una fuente dijo que por lo menos la mitad de los miembros del BLS siguen activos, entre ellos muchos comandantes¹⁰⁶. Algunos residentes de Llorente y Tumaco le dijeron a Crisis Group que el comandante paramilitar de rango medio “El Paisa”, que operaba en la población de Llorente bajo el BLS, sigue ejerciendo control en la región¹⁰⁷.

2. Presencia de nuevos grupos armados ilegales y organizaciones criminales

El cuerpo de Carabineros ha detectado cinco grupos en Nariño: la Organización Nueva Generación (ONG), los Rastrojos, los Traquetos, los Machos y la Mano Negra (que parece llamarse también Águilas Negras)¹⁰⁸. Los dos primeros son los actores principales. Según estimaciones oficiales los nuevos grupos armados y organizaciones criminales tienen cerca de 300 miembros, pero otras fuentes informadas hablan de más de 2.000¹⁰⁹.

El BLS se concentraba en las llanuras a lo largo de la costa Pacífica, en donde operan hoy en día los Rastrojos y

parte de la ONG, así como en los municipios montañosos entre Samaniego y Policarpa, en donde la ONG es más fuerte¹¹⁰. Los reportes sobre las actividades de la ONG empezaron a comienzos del 2006, y a este grupo se le considera un ejemplo de continuidad paramilitar. Testigos informaron que a comienzos de 2007 miembros de la ONG fueron vistos en varios municipios montañosos de Nariño, portando uniformes y brazaletes¹¹¹.

Los Rastrojos son el ala armada de la facción del CNDV liderada por Wilber Varela (“Jabón”)¹¹², a quien Estados Unidos ha pedido en extradición y ofrece una recompensa de US\$5 millones por él. El CNDV es sucesor del Cartel de Cali, y muchos de sus líderes se iniciaron en la organización narcotraficante caleña de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, hoy en día en una cárcel de Estados Unidos. El CNDV se fragmentó después de la muerte de su líder, Orlando Henao, en 1998, cuando Varela y otro líder del clan, Diego Montoya (“Don Diego”), que creó un ejército privado (los “Machos”), libraron una guerra abierta por el control territorial. Durante las negociaciones en Santa Fe de Ralito, el CNDV trató de incorporar a los Rastrojos y los Machos a las AUC para presentarlos como paramilitares en vez de como criminales, pero el gobierno rechazó el intento tras duras críticas al mismo¹¹³.

A diferencia de los carteles de Medellín y Cali, el CNDV no es un grupo monolítico sino más bien una federación de narcotraficantes asociados, algunos de los cuales tienen tratos con los paramilitares, otros con la guerrilla y otros más, como Varela, con ambos. Se cree que Varela trabaja actualmente con insurgentes del ELN en el Cauca¹¹⁴ y que está asociado desde hace bastante con “Macaco”, del BCB¹¹⁵. No es coincidencia el hecho de que los Rastrojos operen en Nariño, en donde antes hubo una fuerte presencia del BCB. De hecho, a Crisis Group le

¹⁰³ Se lo relacionó con el decomiso, en febrero de 2002, de once toneladas de cocaína, y forma parte de la lista de Jefes narcotraficantes especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; tiene una solicitud de extradición pendiente. Juan Carlos Garzón, “Desmovilización del Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar”, Fundación Seguridad y Democracia, agosto de 2005.

¹⁰⁴ Frente Héroes de Tumaco y Llorente, Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño y Frente Lorenzo de Aldana.

¹⁰⁵ Entrevistas de Crisis Group, Barbacoas, 27 de febrero de 2007, Tumaco, 1 de marzo.

¹⁰⁶ Entrevista de Crisis Group, Pasto, 27 de febrero de 2007.

¹⁰⁷ Entrevistas de Crisis Group, Llorente, 28 de febrero de 2007, Tumaco, 29 de febrero.

¹⁰⁸ Según algunas fuentes, los “Machos” de Diego Montoya, jefe de una facción del cartel narcotraficante del norte del Valle, también aparecieron hace poco en Nariño pero fueron expulsados por los Rastrojos, pertenecientes al mismo cartel, quienes forjaron una alianza con la ONG. Entrevistas de Crisis Group, Pasto, Cali, Tumaco, febrero y marzo de 2007; “Plan Integral”, *op. cit.*

¹⁰⁹ Entrevista de Crisis Group, Pasto, 1 de marzo de 2007.

¹¹⁰ Juan Carlos Garzón, “Desmovilización del Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar”, Fundación Seguridad y Democracia, agosto de 2005.

¹¹¹ Véase la siguiente sección.

¹¹² Los Rastrojos nacieron en 2003 de la disolución del Cartel de Cali y el auge de los líderes Wilber Varela y Diego Montoya. Los nuevos ejércitos privados se formaron mediante alianzas entre Traquetos locales y bloques armados locales. Lucharon por el control de los laboratorios de producción de cocaína y las rutas comerciales. “Dinámica reciente de la violencia en el norte del Valle”, Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, julio de 2006.

¹¹³ “Se destapa el comisionado”, *Semana*, 14 de noviembre de 2005.

¹¹⁴ “Farc contra ELN”, *Semana*, 2 de febrero de 2007.

¹¹⁵ Se dice que “Macaco” trabajó para el CNDV antes de incorporarse a las AUC. Gustavo Duncan, *Los señores de la guerra*, (Bogotá, 2006), p. 320. Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 13 y 16 de marzo de 2007.

informaron que “Macaco” vendió su “franquicia” de Nariño a Varela, y que estaban trabajando conjuntamente allí¹¹⁶. En septiembre de 2006 miembros de la armada colombiana capturaron en Tumaco a veinte integrantes de los Rastrojos, junto con un organigrama completo del grupo que reveló una estructura de 120 hombres que operaban en antiguas zonas del BLS¹¹⁷.

3. Dinámica del conflicto

Nariño es un epicentro del conflicto armado y de la crisis humanitaria consiguiente, y ostenta una de las cifras más altas de desplazamiento forzado en Colombia. La responsabilidad en materia de violencia es menos clara que cuando existía la división territorial entre las FARC, el ELN y las AUC, lo cual permitía determinarla con precisión. Ahora son más frecuentes los asesinatos selectivos y anónimos, y en general los grupos armados han asumido un perfil más bajo. Las autoridades a veces no logran determinar el autor o el motivo, pero dicen que la mayor parte de la violencia se relaciona con el narcotráfico¹¹⁸. No obstante, algunos de los grupos armados con nexos cercanos con el BLS desmovilizado, en particular la ONG, parecen estar estableciendo estructuras y un modus operandi, incluidas grandes operaciones de contrainsurgencia, que recuerdan a las de sus predecesores de las AUC.

Desde comienzos del año, las FARC y el ELN, cuyos miembros ascienden en total a cerca de 3.000, según fuentes locales¹¹⁹ han estado combatiendo en las áreas rurales de Samaniego y Gauchavés, con predominio de las FARC¹²⁰; los insurgentes han tenido que enfrentarse a la ONG, los Rastrojos y las Águilas Negras, estas últimas hasta ahora desconocidas en la región. Las FARC y las fuerzas del gobierno también han tenido enfrentamientos en zonas cercanas a la costa del Pacífico y en los municipios montañosos de Policarpa y Cumbitara, y existen reportes de combates entre los Rastrojos y otros grupos nuevos, así como de asesinatos por ajustes de cuentas entre las redes de narcotráfico conectadas con todos los grupos arriba mencionados. No existe información sobre combates entre los Rastrojos y la ONG; es más, se rumora que tienen una alianza¹²¹. Esto no descarta la colaboración ocasional de las FARC y los nuevos grupos en asuntos de droga. La cooperación entre

paramilitares y guerrilleros no es nueva en Nariño. De hecho, en el 2005 se reportó que el BLS había pactado un acuerdo comercial con el Frente 29 de las FARC para exportar drogas¹²².

Los Rastrojos se trasladaron a Nariño después de la desmovilización del BLS a mediados del 2005. Aprovechando esta oportunidad, el grupo se expandió desde su base en el Valle del Cauca hasta el vecino departamento del Cauca, y a través de Nariño hasta la frontera con Ecuador. Con esto, los Rastrojos han establecido su influencia a lo largo del litoral Pacífico de los tres departamentos, con acceso a los cultivos de droga que allí proliferan, no sólo de coca para cocaína sino también de amapola para la producción de heroína. Varela parece tener su propia ala militar, conformada por antiguos combatientes y unidades de las AUC.

En mayo de 2006, una gran marcha campesina protestó contra la fumigación aérea de los cultivos de droga en el municipio de Policarpa. Según se afirma, la protesta fue orquestada y forzada por las FARC para perturbar las elecciones presidenciales y utilizar a los habitantes rurales como escudos humanos contra los nuevos grupos¹²³. Varias personas no identificadas, no se sabe si civiles o guerrilleros de las FARC, cayeron abatidas, supuestamente por la ONG, en el duro combate que se libró. Después de eso varios líderes comunitarios fueron asesinados, también presuntamente por la ONG. Esto hace pensar que en algunas zonas de Nariño la guerra por el control territorial y los cultivos de droga continúa por las mismas vías que antes de la desmovilización del BLS. A fines de marzo y comienzos de abril de 2007, más de 1.000 familias fueron forzadas a abandonar sus hogares en El Charco y La Tola debido a los fuertes enfrentamientos entre infantes de marina y las FARC¹²⁴. Según se informa, también ha habido combates entre la ONG y las Águilas Negras por el control de cultivos de coca y amapola¹²⁵ y de las rutas de narcotráfico en Policarpa y Cumbitara¹²⁶.

¹¹⁶ Entrevistas de Crisis Group, Tumaco, 1 de marzo de 2007, Bogotá, 15 de marzo.

¹¹⁷ Entrevista de Crisis Group, Tumaco, 2 de marzo de 2007.

¹¹⁸ Entrevistas de Crisis Group, Pasto, 26 de febrero de 2007, Tumaco, 28-29 de febrero.

¹¹⁹ Entrevistas de Crisis Group, Pasto y Cali, febrero-marzo de 2007.

¹²⁰ Entrevistas de Crisis Group, Pasto, 26 de febrero de 2007.

¹²¹ Entrevista de Crisis Group, Cali, 1 de marzo de 2007.

¹²² En el decomiso de droga más grande que se ha efectuado en Colombia, en mayo de 2005, consistente en quince toneladas de cocaína encontrada en barcos en el río Mira, en Tumaco, la droga estaba marcada con símbolos tanto de las FARC como de los paramilitares. Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 16 de marzo de 2007; John Otis, “Colombian enemies team up in drug trade”, *Houston Chronicle*, 29 de mayo de 2005; “La Costa Pacífica, especialmente Nariño, se convirtió en la “Tranquilandia” de Farc y paramilitares”, *El Tiempo*, 29 de mayo de 2005.

¹²³ Entrevistas de Crisis Group, Pasto, 28 de febrero y 1 de marzo de 2007.

¹²⁴ “Acción urgente en Nariño”, comunicado, Grupo de Trabajo de la Frontera Colombo-Ecuatoriana, 30 de marzo de 2007.

¹²⁵ Nariño era el segundo departamento en donde más se cultivaba coca en el 2005, con el 16 por ciento del total de

Si bien las fuerzas del gobierno han propinado varios golpes a los nuevos grupos y organizaciones criminales en Nariño, las entrevistas realizadas por Crisis Group hacen pensar que en ciertas zonas los grupos ilegales han contado con el apoyo o la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad. Ha habido varios reportes sobre puestos de control de las fuerzas de seguridad a lo largo de la autopista Pasto-Tumaco, en donde se aceptan pagos de narcotraficantes para permitirles pasar droga o precursores químicos. Pese a la masiva presencia de fuerzas del orden en municipios ubicados a lo largo de la autopista, se dice que se estaban dejando cadáveres en Llorente porque la Fiscalía consideraba que la zona era demasiado peligrosa para incursionar en ella, y el ejército se negaba a ayudar¹²⁷. Así mismo, se notaba una inadecuada coordinación y colaboración entre los diversos elementos de las fuerzas de seguridad, así como entre las instituciones militares y civiles, sobre todo la Fiscalía¹²⁸.

Las fuerzas de seguridad no parecen haber podido ganarse la confianza de la población civil en gran parte de Nariño. En especial, las comunidades indígenas y afrocolombianas se han quejado insistentemente por las ofensivas y la fumigación aérea de los cultivos de coca, e insisten en que los militares abusan de ellos y les roban alimentos y ganado. Dicen que les están imponiendo grandes plantaciones de cultivos industriales, como la palma africana, en sus tierras ancestrales y no niegan que la guerrilla opera en su territorio¹²⁹. Las comunidades indígenas, tradicionalmente muy unidas, también soportan la presión de narcotraficantes, que ofrecen comprarles sus tierras a precios altos y causan con ello muchas fricciones internas, como ha sucedido, por ejemplo, entre los awa y los camawari¹³⁰.

En muchas comunidades de Nariño no se denuncian los abusos por temor. Algunos insisten en que la Fiscalía está infiltrada por nuevos grupos, aliados con las fuerzas de seguridad. La Defensoría del Pueblo tiene un poco más de credibilidad, pero la Procuraduría también se percibe como infiltrada. Las acciones de la Personería, sobre todo en Tumaco, también han sido criticadas.

cultivos (13.875 hectáreas). También ocupaba el segundo puesto en cultivos de amapola, con el 24 por ciento (475 hectáreas). Véase “Colombia, Coca Cultivation Survey”, UNODC, junio de 2006.

¹²⁶ Testimonio de participantes del Grupo de Trabajo de la Frontera Colombo-Ecuatoriana, Bogotá, 11 de marzo de 2007.

¹²⁷ Entrevistas de Crisis Group, Pasto, 1 de marzo de 2007, Tumaco, 2 de marzo.

¹²⁸ Entrevista de Crisis Group, Pasto, 1 de marzo de 2007.

¹²⁹ Entrevistas de Crisis Group, Pasto y Ricaurte, 27 de febrero, y Tumaco, 2 de marzo de 2007.

¹³⁰ Entrevistas de Crisis Group, Pasto y Ricaurte, 27 de febrero de 2007.

Muchos desplazados no se están registrando ante la Acción Social, la entidad gubernamental encargada de ayudarlos, ya sea por temor o porque creen que no vale la pena hacerlo porque no recibirán beneficios. Por consiguiente, la confianza en el gobierno no parece haber mejorado mucho, además, la población civil siente que existe una impunidad generalizada, lo cual menoscaba aún más la credibilidad del Estado¹³¹.

En el departamento de Nariño no hubo el mismo nivel de penetración política paramilitar en los gobiernos local, regional y nacional que en zonas como la costa Caribe. De hecho, Nariño es un bastión del partido de oposición Polo Democrático Alternativo (PDA), aunque habrá que monitorear muy de cerca las elecciones de octubre. Las comunidades locales, algunos observadores e incluso las fuerzas de seguridad en Nariño indicaron que existe evidencia de que los nuevos grupos pretenden influir en dichos comicios¹³².

4. Conclusión

El conflicto en Nariño se caracteriza en buena medida por la continuidad de las fuerzas paramilitares y el narcotráfico. Mientras el negocio de la droga ha llevado a la expansión de las organizaciones criminales y al surgimiento de nuevos grupos en el departamento, la guerra librada por los grupos armados al margen de la ley, tanto nuevos como antiguos, exhibe muchas características familiares, incluidas las operaciones de contrainsurgencia de la ONG. Nariño reviste una importancia estratégica crucial para la guerrilla en términos de su movilidad. A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del país, los líderes del narcotráfico y el crimen organizado no viven allí, sino que confían en lugartenientes. Fuera de Pasto y Tumaco hay pocos centros urbanos grandes, de modo que el lavado de dinero se hace a pequeña escala.

C. COSTA ATLÁNTICA

1. Historia de las AUC en la región

Los comandantes Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar (“Jorge 40”) del Bloque Norte (BN) lideraron la expansión de las AUC en la costa atlántica. El BN aglutinaba a una amplia red de grupos paramilitares locales que operaban de manera independiente, hasta que fueron cooptados, subordinados o sometidos entre 1998 y

¹³¹ Entrevistas de Crisis Group, Pasto, 27 de febrero de 2007, Tumaco, 28 de febrero-1 de marzo.

¹³² Entrevistas de Crisis Group, Tumaco, 28 de febrero-1 de marzo de 2007.

2002¹³³. En 1998 y 1999, el BN se adentró más en la región, derrotando al ELN en la zona cocalera del sur del departamento de Bolívar y la región de los Montes de María, y tomando el control sobre la cuenca del bajo Magdalena y Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. En julio de 2002, la fuerza irregular independiente de Hernán Giraldo (“El Patrón” o “El Viejo”), que controlaba el narcotráfico en las laderas del norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, se sometió al BN¹³⁴. En febrero de 2002, el BN ingresó al área rural del municipio de Uribia en la alta Guajira, y asumió el control de los corredores estratégicos del tráfico ilegal que antes pertenecían a la etnia wayúu. La ofensiva aprovechó las rivalidades entre clanes y finalmente creó el Frente Contrainsurgencia Wayúu bajo el mando del BN¹³⁵.

El 4 de diciembre de 2004, las autodefensas del sur del Magdalena y la isla de San Fernando, lideradas por José Barrera¹³⁶ y activas en los departamentos de Magdalena y Cesar, se convirtieron en el primer grupo del BN en desmovilizarse: 47 hombres entregaron 41 armas. En cuatro desmovilizaciones efectuadas entre mediados de

enero y mediados de julio de 2005, otros 2.100 combatientes del BN depusieron 442 armas en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. El grueso de los grupos restantes del BN y el Bloque Central Bolívar (BCB) en el sur de Bolívar, Atlántico, Magdalena, la Guajira y Cesar se desmovilizó entre el 31 de enero y el 10 de marzo de 2006. Aproximadamente 8.700 combatientes se desmovilizaron, y se entregaron 3.286 armas¹³⁷.

2. Presencia de nuevos grupos armados ilegales y organizaciones criminales

Persisten algunas dudas acerca del compromiso del jefe del BN, “Jorge 40”, con el desmantelamiento de dicho bloque. El decomiso de un computador portátil en poder de Édgar Fierro (“Don Antonio”), su mano derecha militar en el departamento de Atlántico, reveló una actividad política y militar continuada al tiempo que se realizaban las negociaciones con el gobierno de Uribe¹³⁸. Aunque algunas fuentes afirman que “Jorge 40” tiene nexos con grupos delictivos emergentes¹³⁹, parece ser

¹³³ Salvatore Mancuso entregó el mando del BN cuando se desmovilizó a fines del 2004 con el Bloque Catatumbo. “Jorge 40”, oriundo del Cesar, se incorporó a las ACCU y empezó a operar en el sur de Bolívar en 1997. En 1998 viajó al Cesar para organizar las estructuras paramilitares de las nuevas AUC. Con el tiempo, las AUC se expandieron desde las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge en los departamentos de Córdoba y Sucre hacia el occidente y hacia la frontera con Venezuela al oriente.

¹³⁴ Las AUC se enfrentaron con las Autodefensas Mamey de Giraldo después de que tres agentes norteamericanos de la DEA fueron asesinados por sus hombres en noviembre de 2001. Bajo el control del BN, Giraldo rebautizó su fuerza como Bloque de Resistencia Tayrona. Entrevistas de Crisis Group, Barranquilla, 16 de febrero de 2007, Santa Marta, 11 de marzo.

¹³⁵ Los corredores de la Guajira se utilizan para contrabando de mercancía, gasolina venezolana, armas y droga. El 10 de julio de 2002 las AUC asesinaron a quien era presuntamente el principal narcotraficante de Maicao, Mario Cotes, y luego a Luis Ángel González (“Lucho Ángel”), el 7 de marzo de 2003. En Bahía Portete, el 18 de abril de 2004 cuatro personas fueron asesinadas, doce desaparecieron y más de 500 fueron desplazadas, muchas de ellas a Venezuela. El 13 de julio de 2005, Dilian Epinayu, una mujer wayúu y testigo clave de la masacre en Bahía Portete, fue asesinada. Entrevista de Crisis Group, Riohacha, 13 de marzo de 2007. El Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado por “Jorge 40” y los miembros de la familia Ipuana José María Barros y José María Gómez (“Chemabalas”). La policía arrestó a Barros y a “Chemabalas” en octubre de 2004, con lo cual “Pablo” quedó como hombre fuerte de la región. “Dinámica reciente de la confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta”, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, febrero de 2006, pp. 22-23.

¹³⁶ Aunque Barrera fue un jefe paramilitar activo durante más de quince años, salió libre del centro de detención de La Ceja el 4 de octubre de 2006 por falta de cargos.

¹³⁷ El 18 de enero de 2005, 925 hombres del Bloque Sinú-San Jorge de Salvatore Mancuso; el 2 de febrero de 2005, “Ramón Mojana” y 110 hombres del Frente Mojana; el 15 de junio de 2005, 465 combatientes del Bloque Héroes de Tolová, liderado por Diego Murillo (“Don Berna”); el 14 de julio de 2005, 594 hombres del Bloque Héroes de Montes de María; el 31 de enero de 2006, 2.523 combatientes del Frente Sur de Bolívar del BCB; el 3 de febrero de 2006, 1.166 combatientes del Bloque Resistencia Tayrona de Hernán Giraldo; el 4 de marzo de 2006, 251 combatientes del Frente Julio Peinado Becerra, de Julio Francisco Prada (“Juancho Prada”), de las AUC. El Bloque Norte (BN) se desmovilizó en dos etapas: el 8 de marzo de 2006, 880 miembros de las fuerzas de ataque y 1.335 miembros de los frentes de apoyo social; dos días después, 1.220 combatientes de las fuerzas de ataque y 1.325 miembros de apoyo social. Véase www.altocomisionadopalapaz.gov.co.

¹³⁸ El computador portátil confiscado el 11 de marzo de 2006 contenía una lista de 558 asesinatos de líderes sindicales y activistas de izquierda cometidos entre el 2003 y el 2005 en el departamento del Atlántico. Esta información fue reforzada por una investigación de la Fiscalía sobre las actividades de “Jorge 40”, que sugería que estaba construyendo estructuras de poder paralelas al tiempo que se estaba desmovilizando oficialmente. “Así opera el imperio criminal del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’”, *Semana*, 7 de octubre de 2006. Diversas fuentes le dijeron a Crisis Group que varios conocidos combatientes y comandantes de rango medio de las estructuras del BN no estuvieron presentes en las ceremonias de desmovilización, y que campesinos se pusieron trajes de fatiga militar tras haberseles prometido el estipendio mensual destinado a los combatientes desmovilizados. Entrevistas de Crisis Group, Barranquilla, 15-16 de febrero de 2007, Santa Marta, 12 de marzo.

¹³⁹ Una fuente dijo que “Jorge 40” podría haber mantenido una reserva estratégica de aproximadamente 150 hombres

que sus hombres clave que no se desmovilizaron optaron por mantener el control de centros urbanos de la costa atlántica como Barranquilla. La presencia del sicariato pone de relieve la necesidad de utilizar medidas de fuerza para mantener el control sobre todo tipo de actividades ilícitas¹⁴⁰. Algunas fuentes señalaron como un hecho sospechoso el que “Don Antonio” y Carlos Mario García (“El Médico” o “Gonzalo”), los enlaces políticos de “Jorge 40” en Barranquilla, se hubieran desmovilizado con el Bloque Chimila, que no opera en el departamento del Atlántico¹⁴¹.

Después del arresto de “Don Antonio”, Miguel Villarreal (“Salomón”) y Wilmer Guerrero (“Nacho Guerrero” o “Luisito”) se convirtieron en los nuevos jefes del bajo mundo de Barranquilla¹⁴². Parece ser que, después de la pérdida del computador portátil, se dio la orden de eliminar a todo aquel que tuviera conocimiento de los vínculos políticos del BN¹⁴³. Sin embargo, fuentes de la policía insisten en que no es claro si “Salomón” y “Nacho Guerrero” siguen a “Jorge 40” o actúan por su cuenta. Se cree que ambos se ocultaban en Venezuela¹⁴⁴. “Salomón” fue arrestado en la ciudad de Bucaramanga, al nororiente, el 20 de abril de 2007.

El rápido surgimiento de nuevos grupos armados apenas unos meses después de la desmovilización del último contingente del BN parece estar relacionado con comandantes de rango medio y combatientes que no se desmovilizaron o que retomaron las armas poco después. Con las estructuras básicas de los frentes desmovilizados del BN todavía intactas, los nuevos grupos que han conformado están tratando de mantener

fuertemente armados en el extremo sur del Magdalena (municipios de El Banco y Plato) y del Cesar. Otra fuente afirmó que sus hombres estaban peleando con otros grupos nuevos por el control de las rutas de narcotráfico en el Cesar y la Guajira. Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 13 de febrero y 7 de marzo de 2007.

¹⁴⁰ Según varias fuentes, las bandas criminales en Barranquilla y el resto del departamento de Atlántico tienen entre 200 y 375 miembros. “‘Jorge 40’ recargado”, *Semana*, 19 de noviembre de 2006. Véase www.indepaz.org.co.

¹⁴¹ Entrevista de Crisis Group, Barranquilla, 16 de febrero de 2007.

¹⁴² Fuentes de prensa indican que Wilmer Guerrero también lidera las estructuras criminales en el departamento de Sucre. *El Tiempo*, 13 de noviembre de 2006. Ambos hombres son ex oficiales de la policía que se unieron a “Jorge 40” tras haber sido implicados en la devolución de un cargamento de dos toneladas de cocaína decomisada a los narcotraficantes en el 2002, y que no se desmovilizaron. Entrevistas de Crisis Group, Barranquilla, 15-16 de febrero de 2007.

¹⁴³ Entrevistas de Crisis Group, Barranquilla, 16 de febrero de 2007.

¹⁴⁴ Entrevista de Crisis Group, Barranquilla, 16 de febrero de 2007.

el control territorial sobre regiones estratégicas en las que antes operaban y donde tienen fuertes nexos con actividades delictivas, sobre todo narcotráfico y contrabando de armas¹⁴⁵. Un ejemplo de esto es “Codazzi”, un comandante de rango medio que no se desmovilizó¹⁴⁶ y que según se cree controla corredores de droga en Chibolo, Tenerife y Pivijay (departamento del Magdalena) con unos 50 hombres¹⁴⁷. En el departamento de la Guajira, cerca de 40 hombres del Frente Contrainsurgencia Wayúu, liderado por “Pablo”, no se desmovilizaron y siguen controlando el contrabando y el narcotráfico en la alta Guajira, el triángulo Riohacha-Maicao-Uribia¹⁴⁸.

La costa atlántica no se ha librado de la presencia de grupos de las Águilas Negras, responsables de acciones en Atlántico, Cesar, Magdalena y la Guajira. A fines del 2006, las Águilas Negras enviaron amenazas escritas a líderes sindicales de la Universidad del Atlántico en Barranquilla (Atlántico). En el Magdalena, operan en los municipios de Santa Marta, la zona bananera y Fundación, con una base en el distrito rural de Palmor, en Ciénaga, y envían panfletos firmados por los ex comandantes de rango medio del BN Adán Rojas Mendoza (“Negro Rojas”) y “101” a empresarios y agricultores¹⁴⁹; en Maicao (la Guajira), el ex comandante de rango medio del BN Jairo Samper (“Lucho”) armó un nuevo grupo que se asoció con las Águilas Negras.

El rearme en las faldas del norte de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena y la Guajira) se está haciendo a espaldas de Hernán Giraldo e incluye elementos foráneos a la región¹⁵⁰; Giraldo, que se encuentra recluido en la cárcel de Itagüí, parece haber sido depuesto por varios ex comandantes¹⁵¹. Dos comandantes desmovilizados de rango medio del Bloque Resistencia Tayrona, que luego

¹⁴⁵ Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 5 de febrero de 2007.

¹⁴⁶ “Codazzi” comandaba el grupo Chivilo, en territorios de la Ciénaga Grande, El Difícil, Nueva Granada, Plato y Pueblo Viejo y operaba bajo el frente Jhon Jairo López del BN. “Dinámica reciente de la confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta”, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, febrero de 2006, p. 21.

¹⁴⁷ Pese a ser parapléjico, “El Cóndor” o “Halcón 1”, hoy en día “El Acostado”, un reconocido jefe paramilitar de El Banco (sur del Magdalena), presuntamente dirige un nuevo grupo al sur de los departamentos de Magdalena y Cesar, con antiguos miembros del BCB.

¹⁴⁸ Entrevistas de Crisis Group, Riohacha, 13-14 de marzo de 2007.

¹⁴⁹ Entrevistas de Crisis Group, Santa Marta, 12 de marzo de 2007.

¹⁵⁰ Entrevistas de Crisis Group, Santa Marta e Itagüí, 12 y 30 de marzo de 2007.

¹⁵¹ Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta, 13 y 16 de febrero y 11-13 de marzo de 2007.

fueron arrestados, Norberto Quiroga (“5-5” o “Beto Quiroga”) y Édgar Córdoba Trujillo (“5-7”), armaron un nuevo grupo, el Frente Cacique Arhuaco, conformado por entre 50 y 60 hombres¹⁵². Aunque una fuente que estuvo en su base en la Sierra Nevada le dijo a Crisis Group que justificaban este hecho aduciendo que el gobierno no había jugado limpio con el nuevo marco de la LJP¹⁵³, fuentes judiciales creen que “Felipe”, un ex colaborador cercano de “Jorge 40”, podría estar detrás del nuevo frente¹⁵⁴.

Los hombres desmovilizados del Bloque Resistencia Tayrona de Hernán Giraldo denunciaron presiones para retomar las armas a fines del 2006. Muchos fueron desplazados a la fuerza a Santa Marta, y una serie de asesinatos en dicha ciudad parece confirmar sus denuncias¹⁵⁵. Como respuesta, se cree que algunos tomaron nuevamente las armas bajo el comandante “Chaparro”, aunque no se conoce el nombre de su nuevo grupo.

3. Dinámica del conflicto

Las Águilas Negras parecen estar operando en la costa atlántica como grupos criminales urbanos, por lo menos iguales de peligrosos que sus predecesores de las AUC. Según defensores de los derechos humanos, existen pruebas de comunicaciones entre ellos, incluida una reunión entre “Salomón”, con su base en Barranquilla, y las Águilas Negras del Magdalena¹⁵⁶. Se cree que el presunto comandante “Negro Rojas” de las Águilas Negras de Santa Marta está asociado con los comandantes “5-5” y “5-7”¹⁵⁷. Sin embargo, las fuerzas de seguridad de la región creen que las Águilas Negras son grupos armados que operan con independencia, y que utilizan el nombre genéricamente para inculcar temor entre la población¹⁵⁸. Las fuerzas de seguridad sí

parecen estar buscando a las Águilas Negras en el Magdalena y la Guajira, como lo demuestran las capturas de “101”, “Negro Rojas” y “Lucho”¹⁵⁹.

En las laderas del norte de la Sierra Nevada, el grupo Cacique Arhuaco de “5-5” y “5-7” ha estado combatiendo contra “Chaparro” por el control de cultivos de droga y puertos clandestinos, y parece contar con el respaldo de ex jefes de las AUC y capos de la droga. La lucha se recrudeció en enero y febrero de 2007. Según fuentes estatales, Vicente Castaño visitó a “5-5” y “5-7” y les envió 300 hombres de refuerzo¹⁶⁰, mientras que “Chaparro” recibió la ayuda de 150 hombres de “Macaco” y los “Mellizos”¹⁶¹, que llegaron por uno de los puertos clandestinos de Dibulla¹⁶².

Según se dice, “Macaco” envió a un emisario para negociar una tregua y un acuerdo, tras lo cual la situación parece haberse calmado; “Chaparro” ahora controla desde el río Piedras hasta el río Palomino, mientras que “5-5” y “5-7” controlan desde el río Piedras hacia el occidente, en donde operaban bajo el BN¹⁶³. Sin embargo, como “5-5” y “5-7” fueron arrestados el 9 de marzo de 2007 en un allanamiento de la policía en Medellín¹⁶⁴, no se sabe quién es el nuevo

haberse marchado de la ciudad o abandonaron las actividades sindicales hace mucho tiempo. El logotipo de las Águilas Negras que figura en el panfleto supuestamente es diferente del que aparece en los comunicados de las Águilas Negras en el Magdalena. Otra fuente observó que un grupo que se identificaba como Muerte a Sindicalistas (MAS) había enviado anteriormente amenazas similares. Entrevistas de Crisis Group, Barranquilla, 16 de febrero de 2007.

¹⁵⁹ La policía arrestó a “Rojas” en el departamento del Tolima, 750 km al sur de Santa Marta, el 29 de marzo de 2007; “Lucho” fue capturado en Soledad (Atlántico) el 28 de febrero.

¹⁶⁰ Entrevistas de Crisis Group, Santa Marta, 12 de marzo de 2007.

¹⁶¹ Los “Mellizos” fueron acusados de ser narcotraficantes que se hacen pasar por paramilitares para evitar su extradición a Estados Unidos. Miguel Ángel cambió su nombre por el de comandante “Pablo Arauca” del Bloque Vencedores del Arauca, que opera en las llanuras cercanas a la frontera con Venezuela.

¹⁶² Entrevista de Crisis Group, Santa Marta, 12 de marzo de 2007.

¹⁶³ “5-5” dirigió la ofensiva de las AUC que sometió a Hernán Giraldo en el 2002, y luego siguió como líder del grupo La Tagua del Bloque Resistencia Tayrona en Bonda, Minca y El Campano (Sierra Nevada). “Dinámica reciente de la confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta”, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, febrero de 2006, p. 20. Entrevista de Crisis Group, Santa Marta, 12 de marzo de 2007.

¹⁶⁴ Fuentes sugieren que su presencia en Medellín podría deberse al supuesto pacto “Macaco”-“Los Mellizos”-Vicente Castaño. Entrevistas de Crisis Group, Barranquilla y Santa Marta, 16 de febrero y 11-12 de marzo de 2007.

¹⁵² Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 13 de febrero de 2007, Santa Marta, 12 de marzo.

¹⁵³ Entrevista de Crisis Group, Santa Marta, 12 de marzo de 2007.

¹⁵⁴ Entrevista de Crisis Group, Santa Marta, 12 de marzo de 2007.

¹⁵⁵ Entrevistas de Crisis Group, Bogotá y Barranquilla, 13 y 16 de febrero de 2007.

¹⁵⁶ Entrevistas de Crisis Group, Barranquilla y Santa Marta, 16 de febrero y 12 de marzo de 2007.

¹⁵⁷ Entrevistas de Crisis Group, Barranquilla y Santa Marta, 16 de febrero y 11-12 de marzo de 2007.

¹⁵⁸ El comandante del Batallón N° 1 de la Marina en la región de los Montes de María dijo hace poco que en su jurisdicción había grupos nuevos, pero no Águilas Negras. “Águilas Negras no operan en Sucre y Bolívar”, *El Heraldo*, 15 de febrero de 2007. Autoridades de la policía afirman que el panfleto en el que se amenaza a líderes sindicales es antiguo, pues muchas de las personas cuyos nombres figuran en la lista llevan años de

comandante del Cacique Arhuaco ni si su territorio termine siendo ocupado por un nuevo grupo armado.

Los refuerzos enviados a regiones específicas por ex comandantes de las AUC podrían articular nuevas estructuras entre nuevos grupos de todo el país¹⁶⁵. Si esto sucede en la costa atlántica, las sabanas de San Ángel (en el centro del Magdalena) y el departamento del Cesar podrían convertirse en corredores estratégicos para el transporte de hoja de coca desde el sur de Bolívar hasta los laboratorios ubicados en la Sierra Nevada, antes de ser exportada por las ensenadas y los puertos ilegales en las estribaciones emplazadas al norte de la Sierra Nevada y en la península de la Guajira.

El control sobre el departamento de la Guajira es clave para poder realizar las operaciones de contrabando que facilitan el lavado de dinero y el ingreso de la gasolina venezolana barata que requieren los narcotraficantes. El conflicto entre el nuevo grupo de “Pablo” y remanentes de la estructura de contrabando wayúu estalló nuevamente en febrero de 2006 con el asesinato del hermano de un presunto jefe del narcotráfico wayúu. Desde abril de 2006, se han cometido asesinatos atribuidos a nuevos grupos en tierras indígenas wayúu¹⁶⁶. Los wayúu están siendo intimidados por los nuevos grupos que mantienen un férreo control sobre las operaciones de contrabando en Maicao y Bahía Portete, pese a la presencia de un batallón del ejército en la alta Guajira. Sin embargo los wayúu de Maicao han comenzado a armarse para resistir los ataques¹⁶⁷.

Como los nuevos grupos se concentran sobre todo en operaciones de narcotráfico, no se sabe si combatirán contra las FARC y el ELN o si forjarán alianzas *ad hoc* con ellos cuando la guerrilla intente penetrar en sus

¹⁶⁵ Según se afirma, hombres que antes estaban bajo el mando de “Macaco” podrían estar controlando todavía los cultivos de coca en el sur de Bolívar, una zona de influencia del ahora desmantelado BCB. Se cree que nuevos grupos surgidos de antiguas estructuras del BCB liderados por “Mono Teto” y “Leo” están combatiendo contra hombres que operaban bajo el mando de “Jorge 40” por el control de rutas de droga en el Cesar y la Guajira. Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 7 de marzo de 2007.

¹⁶⁶ El 4 de abril de 2006, Álvaro Uriana fue torturado y asesinado en Poropo (municipio de Uribia); el 18 de febrero de 2007, Gregorio Solano fue sacado del resguardo wayúu Mayabagloma y asesinado; el 3 de marzo de 2007, los hermanos Joel y Daniel Paz González fueron asesinados en el distrito de Paraguachón (municipio de Maicao); el 14 de marzo de 2007, Osiris Amaya, una maestra del resguardo indígena wayúu de El Cerro (municipio de Hatonuevo), fue asesinada. Comunicación por correo electrónico con Crisis Group, 12 de abril de 2007.

¹⁶⁷ Entrevistas de Crisis Group, Riohacha, 13-14 de marzo de 2007.

territorios. En el sur de la Guajira la amenaza insurgente está latente, sobre todo en el corredor estratégico ubicado entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, cerca de la frontera con Venezuela¹⁶⁸. El Frente Francisco Javier Castaño del ELN y los Frentes 19 y 59 de las FARC mantienen presencia armada en lo alto de las sierras, pese a la fuerte presión del ejército¹⁶⁹. Si bien las FARC parecen estar tratando de conquistar los corazones y las mentes de la población absteniéndose de llevar a cabo operaciones para recuperar territorio¹⁷⁰, personas que trabajan con comunidades de la Sierra Nevada le dijeron a Crisis Group que la guerrilla está incursionando en los resguardos indígenas¹⁷¹.

4. Conclusión

Bajo las AUC la costa atlántica estaba controlada por el BN, varios grupos del cual dominaban territorios bien definidos. Los nuevos grupos que han surgido parecen operar de acuerdo con una lógica similar, siendo sus líderes comandantes de rango medio y combatientes que no se desmovilizaron o que volvieron a tomar las armas poco después. Tienen sus bases en regiones en donde antes operaban, con fuertes nexos criminales. Sin embargo, también hay elementos externos, al parecer con vínculos con ex jefes de las AUC como Vicente Castaño (quien anda suelto) y “Macaco” (recluido en la cárcel de Itagüí), que quieren abrirse paso también. Aunque por el momento todos los grupos parecen actuar por su cuenta, existen indicios de que los nuevos grupos han hecho acuerdos, lo que quizás presagia una nueva estructura de

¹⁶⁸ El Frente 41 de las FARC utiliza territorio venezolano para sus operaciones en la Serranía de Perijá, movilizando cerca de 700 hombres. Entrevista de Crisis Group, Riohacha, 14 de marzo de 2007.

¹⁶⁹ Antes de la desmovilización del BN, el ejército estableció un campo de entrenamiento avanzado y un batallón de alta montaña en lo alto de la Sierra Nevada. Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, Santa Marta, Riohacha, 13 de febrero y 11-12 y 14 de marzo de 2007.

¹⁷⁰ Entrevista de Crisis Group, Santa Marta, 12 de marzo de 2007.

¹⁷¹ En Mingueo (municipio de Dibulla), los pobladores pertenecientes a las etnias wiwa, kogi y wayúu han denunciado la presencia de todos los actores armados en sus territorios; los wayúu del municipio de San Juan del Cesar fueron expulsados; hace poco, un Mamo (hombre sabio) y el wayúu Alejandro Urariyu fueron asesinados por la guerrilla; la etnia chimila en San Ángel (Magdalena) está siendo rotulada como colaboradora de los paramilitares; según se afirma, las FARC aumentaron las extorsiones a los campesinos. Entrevistas de Crisis Group, Santa Marta, Riohacha, 12-14 de marzo de 2007. El pueblo wiwa de las faldas orientales de la Sierra Nevada ha sido presionado por las FARC para que les den refugio y comida, y los militares lo estigmatizan como colaborador de la guerrilla. Documentos obtenidos durante una entrevista de Crisis Group, Riohacha, 13 de marzo de 2007.

cooperación semejante a la antigua estructura de las AUC. Queda por ver cómo reaccionarán estos nuevos grupos frente a los avances de la guerrilla y cómo será su relación con las comunidades. La evidencia hace pensar que las bandas de extorsión de las AUC siguen operando, pero el tipo de vínculos con la comunidad que caracterizaba a las autodefensas no se ha dejado ver¹⁷².

D. MEDELLÍN

1. Historia de las AUC en la ciudad

La actividad paramilitar en Medellín, así como la de su principal actor, Diego Murillo (“Don Berna”), tiene sus raíces en el narcotráfico y el crimen organizado. “Don Berna” fue jefe de seguridad de uno de los clanes del cartel de la droga de Medellín; cuando su jefe fue asesinado por Pablo Escobar en la cárcel, se convirtió en miembro clave de los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar). Este grupo se dedicó a debilitar el poder del gran capo de la droga mediante asesinatos selectivos, hasta que Escobar cayó abatido por la policía en 1993. Fue como integrante de los PEPES que “Don Berna” cimentó su relación con Carlos y Fidel Castaño. En 1998 exploró la posibilidad de ingresar a las AUC y fue admitido como miembro de su órgano dirigente, el Estado Mayor, con el nombre de “Adolfo Paz”¹⁷³. Desde hace mucho tiempo lo requieren los organismos de orden público de Estados Unidos, que lo han pedido en extradición por narcotráfico¹⁷⁴.

Antes de que las AUC impusieran su predominio, una variada gama de organizaciones criminales pugaban por el control en Medellín. Ciertos sectores de la ciudad, en especial las barriadas pobres (comunidades), llevaban mucho tiempo bajo el dominio de “combos” o bandas callejeras¹⁷⁵. El Bloque Metro, un grupo paramilitar que se unió a las AUC, y las milicias –algunas independientes y otras asociadas con las FARC y el ELN– también formaban parte de este mundo al margen de la ley, y controlaban sobre todo la Comuna 13¹⁷⁶.

La estrategia de “Don Berna” era tomar el control de estos grupos, o por lo menos hacer que rindieran cuentas a las autodefensas. En el 2001 se creó el Bloque Cacique Nutibara (BCN), la estructura mafiosa que utilizó “Don Berna” para ejercer su poder en la ciudad. La destrucción de las redes milicianas se logró como resultado de la ofensiva lanzada por las fuerzas de seguridad en el 2002 en Medellín (Operación Orión), dirigida por el general Mario Montoya, hoy comandante del ejército. Hay numerosas informaciones acerca de paramilitares que marcharon detrás de esta exitosa ofensiva y consolidaron su control sobre la Comuna 13¹⁷⁷. El general Montoya está envuelto en un escándalo en torno a dicha operación, desde cuando *Los Angeles Times* informó que reportes de inteligencia demuestran que trabajó en asocio con paramilitares en la ofensiva¹⁷⁸. Montoya ha negado enérgicamente las acusaciones y cuenta con el apoyo del gobierno y de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

La última etapa de la toma del poder en Medellín por “Don Berna” fue la destrucción en el 2003 de una facción de las AUC que se negó a someterse y objetó la participación de los paramilitares en actividades de narcotráfico: el Bloque Metro, liderado por Carlos García (“Rodrigo” o “00”)¹⁷⁹. La zona rural que controlaba cerca de Medellín fue tomada por un nuevo grupo controlado por “Don Berna”, el Bloque Héroes de Granada¹⁸⁰. Cuando se produjo la desmovilización del BCN, “Don Berna” dominaba gran parte del mundo criminal en Medellín.

La desmovilización de 873 miembros del BCN en Medellín el 23 de noviembre de 2003 inició el desmantelamiento de las AUC, proceso que se prolongó hasta mediados del 2006. Sin embargo, observadores independientes y grupos de derechos humanos insisten en que quienes entregaron armas no eran en verdad miembros de las AUC sino integrantes de bandas, algunos de ellos reclutados exclusivamente para la desmovilización. En retrospectiva, esto quizás no debe sorprender. El BCN no era un grupo paramilitar tradicional sino una red¹⁸¹ que

¹⁷² Entrevistas de Crisis Group, Itagüí, 30 de marzo de 2007.

¹⁷³ Véanse Norbey Quevedo H. y Libardo Cardona M., “El renacer ‘para’ que ronda en Antioquia”, *El Espectador*, 24 de febrero de 2007; Jeremy McDermott, “FARC and the paramilitaries take over Colombia's drug trade”, *Jane's Intelligence Review*, 1 de julio de 2004.

¹⁷⁴ Chris Kraul, “U.S., Colombia spar over drug lord”, *Los Angeles Times*, 12 de febrero de 2006.

¹⁷⁵ En el 2003 había más de 6.300 pandillas en la ciudad. Véase Jorge Giraldo Ramírez, “Conflicto armado urbano y violencia homicida. El caso de Medellín”, Centro de Análisis Político, Universidad Eafit, febrero de 2006.

¹⁷⁶ El fenómeno de las milicias era complejo. Algunas de las autónomas eran: “Milicias Populares del Pueblo y para el

Pueblo”, “Milicias Pueblo Unido”, “Milicias Ché Guevara” y “Milicias Obreras 1° de Mayo”. Vinculadas al ELN estaban las “Milicias Populares del Valle de Aburrá” y las “Milicias 6 y 7 de Noviembre”. Las “Milicias Bolívarianas” tenían nexos con las FARC. Véase Ana María Jaramillo, *Milicias populares en Medellín: entre la guerra y la paz* (Medellín, 1994).

¹⁷⁷ “Army criticized for not attacking paramilitaries in Medellín”, EFE, 18 de octubre de 2002.

¹⁷⁸ Paul Richter y Greg Miller, “Colombia army chief linked to outlaw militias”, *Los Angeles Times*, 25 de marzo de 2007.

¹⁷⁹ “La cacería”, *Semana*, 28 de septiembre de 2003.

¹⁸⁰ El Bloque Héroes de Granada se desmovilizó en agosto de 2005 en San Roque (Antioquia); fue una de las desmovilizaciones más numerosas, con más de 2.000 paramilitares.

¹⁸¹ Entrevista de Crisis Group, Medellín, 15 de febrero de 2007.

incluía diversos componentes, entre ellos narcotraficantes, oficinas de cobro y bandas dedicadas a todo tipo de actividades delictivas. La mayor parte de los integrantes no eran paramilitares puros, sino que más bien, al estilo de la mafia tradicional, efectuaban pagos ascendentes en la cadena de mando de “Don Berna”. Estas organizaciones criminales no estaban incluidas en la desmovilización y muchas de ellas existen todavía¹⁸².

2. Presencia de nuevos grupos armados ilegales y organizaciones criminales

En Medellín es donde resulta más difícil probar que hoy opera un nuevo grupo, y donde más fácil es demostrar que la influencia del ex jefe de las AUC sigue en gran parte intacta. Aunque no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza exacta de la mafia que dirige su bajo mundo criminal, varias fuentes convienen en que “Don Berna” sigue siendo quien maneja los hilos del poder¹⁸³. Hay noticias sobre grupos que todavía controlan y patrullan las calles de las comunas, aunque ahora sin uniformes ni rifles¹⁸⁴. Ha habido asesinatos relacionados con lucrativos contratos de apuestas, que según se cree son controlados por grupos emergentes¹⁸⁵. En muchas partes, sus actividades han forzado desplazamientos relacionados con luchas territoriales¹⁸⁶. Se habla de reclutamiento forzado por parte de nuevos grupos vinculados a los paramilitares¹⁸⁷. Los reportes sobre la influencia de “Don Berna” son demasiado frecuentes como para hacer caso omiso de ellos¹⁸⁸.

A diferencia de lo que ocurre en los pueblos y las ciudades de tamaño intermedio, a ningún actor armado ilegal le es fácil imponer a alguien de su confianza como alcalde de la segunda ciudad más grande de Colombia, que además es uno de sus principales centros industriales. En vez de infiltración política al más alto nivel, los grupos armados han enfocado su atención en la política de nivel callejero, las Juntas de

Acción Comunal (JAC), en donde se han asegurado de que candidatos simpatizantes ganen y ocupen cargos altos¹⁸⁹.

3. Dinámica del conflicto

En la actualidad, hay escasa evidencia de conflictos abiertos en Medellín. La tasa de homicidios ha ido disminuyendo establemente, al tiempo que aumenta la inversión en la ciudad. Esto se debe a dos factores. El primero es que la policía ha creado catorce nuevas estaciones en los últimos cuatro años, y ha agregado al pie de fuerza 2.500 oficiales¹⁹⁰. El alcalde Sergio Fajardo, como se puede ver en el apoyo brindado al programa de reintegración, prestó mucha atención a los temas de seguridad y colaboró estrechamente con la policía¹⁹¹. El espacio de maniobra para los nuevos grupos y la mafia se ha reducido significativamente.

El otro factor es el estricto control que, según se afirma, sigue ejerciendo “Don Berna” sobre el bajo mundo. A través de las oficinas de cobro, su gente todavía parece controlar a los *combos* y las *bandas*¹⁹². Permiten la comisión de delitos como hurto, narcotráfico y robo de vehículos, pero no así el asesinato¹⁹³. “Don Berna” ha impuesto la paz entre las facciones criminales y dirime disputas, evitando así que estalle una guerra abierta entre bandas¹⁹⁴. Las disputas se resuelven por lo general ya sea mediante el pago a las partes lesionadas o el asesinato selectivo de quienes infringen las reglas. Ha habido varios asesinatos de ex paramilitares y criminales de alto perfil, en especial los de Gustavo Upegui y Daniel Mejía (“Danielito”)¹⁹⁵. A ambos se los ha relacionado con las oficinas de cobro, y la Fiscalía está investigando a “Don Berna”¹⁹⁶. Los asesinatos se han relacionado con “Rogelio” (“El Flaco”), que presuntamente es el lugarteniente que ejecuta órdenes impartidas por paramilitares desde la cárcel de Itagüí¹⁹⁷.

¹⁸² Entrevista de Crisis Group, Medellín, 9 de febrero de 2007.

¹⁸³ Entrevistas de Crisis Group, Medellín, 26 de marzo de 2007.

¹⁸⁴ Entrevistas de Crisis Group, Medellín, 13 de febrero de 2007; Norbey Quevedo H. y Libardo Cardona M., “El renacer ‘para’ que ronda en Antioquia”, *El Espectador*, 24 de febrero de 2007.

¹⁸⁵ “Ajuste de cuentas relacionado con el negocio del chance podría estar detrás del atentado en Medellín”, *El Tiempo*, 11 de julio de 2006.

¹⁸⁶ Entrevista de Crisis Group, Medellín, 14 de febrero de 2007; “Se recrudece el destierro intraurbano”, *El Colombiano*, 1 de octubre de 2006.

¹⁸⁷ “Alarma en la Comuna 13 por reclutamiento forzado de menores a grupos armados”, *El Tiempo*, 5 de agosto de 2005.

¹⁸⁸ Gloria Castrillón, “La mano invisible de ‘Don Berna’”, *Cromos*, 5 de junio de 2005.

¹⁸⁹ Entrevista de Crisis Group, Medellín, 13 de febrero de 2007.

¹⁹⁰ Entrevistas de Crisis Group, Medellín, 8-9 de febrero de 2007.

¹⁹¹ Entrevistas de Crisis Group, Medellín, 9 de febrero de 2007.

¹⁹² Entrevista de Crisis Group, Medellín, 13 de febrero de 2007.

¹⁹³ Entrevista de Crisis Group, Medellín, 13 de febrero de 2007.

¹⁹⁴ “El ‘pacificador’”, *Semana*, 24 de abril de 2005.

¹⁹⁵ Gustavo Upegui era el dueño del Envigado Fútbol Club y se dice que fue miembro del cartel de Medellín. Cayó asesinado en julio de 2006 en lo que se cree que fue una disputa interna entre nuevos grupos; Daniel Mejía, quien se desmovilizó con el Bloque Héroes de Granada, salió de la cárcel en noviembre de 2006 por falta de cargos. Desapareció una semana después y se le cree muerto. “Atribuyen muerte de dueño del Envigado FC a pugna entre paramilitares”, *El Tiempo*, 13 de marzo de 2007.

¹⁹⁶ Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 13 de marzo de 2007.

¹⁹⁷ Entrevistas de Crisis Group, Medellín, 8-9 de febrero de 2007, Bogotá, 16 de marzo, Envigado, 28 de marzo.

Irónicamente, una de las herramientas que según parece le permite a “Don Berna” mantener la organización bajo su mando es el organismo no gubernamental establecido para agrupar a los paramilitares desmovilizados, la Corporación Democracia, que admitió que aún le rinde cuentas a “Don Berna”¹⁹⁸. En sus libros figuran 4.150 paramilitares desmovilizados, principalmente del BCN y el Bloque Héroes de Granada¹⁹⁹. Un representante le dijo a Crisis Group que, pese a los obstáculos, la organización sigue comprometida con el programa de reintegración²⁰⁰.

4. Conclusión

Desde la época de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, esta ciudad ha sido teatro de operaciones de líderes poderosos y grupos de crimen organizado. Esto no ha cambiado. “Don Berna” concentró poder en sus manos y asumió el papel que antes desempeñó Escobar, convirtiendo durante un tiempo a las AUC en una organización aglutinadora bajo la cual prosperaba la mafia. Hoy en día el poder del Estado se está consolidando progresivamente gracias a la determinación de las autoridades locales, y ya no se libran combates abiertos entre grupos armados con convicciones ideológicas. Sin embargo, parece que la organización de “Don Berna” sigue satisfaciendo las necesidades de la mafia.

IV. RESPUESTA ESTATAL

A. POLÍTICA DE SEGURIDAD

Después de cuatro años de su “política de seguridad democrática” (PSD), el gobierno de Uribe lanzó lo que denomina la “política de consolidación de la seguridad democrática” (PCSD)²⁰¹, que, como su nombre lo indica, tiene como fin consolidar las ganancias de la anterior a lo largo del segundo mandato, que termina en el 2010. Entre las amenazas identificadas están la insistencia de los “grupos narcoterroristas [...] en el terrorismo y el narcotráfico” y las “bandas criminales que pretenden hacerse al control de las diferentes actividades delictivas en las que incurrian las autodefensas ilegales”²⁰². Aunque la policía diferencia entre “grupos narcoterroristas” y “bandas criminales”, se pone énfasis en describir el reto de seguridad esencialmente como uno criminal. Con respecto a las “bandas criminales”, subraya la “firme decisión del gobierno de retirar todos los beneficios jurídicos, aplicar la legislación penal ordinaria y cuando sea procedente, extraditar a cualquier desmovilizado de estas agrupaciones que reincida en actividades de narcotráfico, terrorismo o cualquier otro delito”²⁰³.

Consciente de que el surgimiento de nuevos grupos podría menoscabar la desmovilización de las AUC y el proceso de la LJP, Uribe le ha asignado una alta prioridad a combatirlos²⁰⁴, con tácticas más afines a las de la guerra contra los carteles de droga que a las de las operaciones de contrainsurgencia que se utilizan contra la guerrilla y, en menor medida, contra los paramilitares. Esto se debe en parte a que los nuevos grupos han optado por una presencia más clandestina²⁰⁵. La policía ha lanzado un “Plan Integral contra las Bandas Criminales”, bajo el mando del cuerpo de policía de Carabineros. Varias otras ramas de las fuerzas de seguridad –incluidos el ejército, la armada y el DAS– se reúnen con regularidad con personal de la Fiscalía y la misión de la OEA para este efecto²⁰⁶.

²⁰¹ “Política de consolidación de la seguridad democrática: fortalecimiento de las capacidades del sector defensa y seguridad”, Documento Conpes, N° 3460, 26 de febrero de 2007.

²⁰² *Ibid*, pp. 2-3.

²⁰³ *Ibid*, p. 3.

²⁰⁴ Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 13 y 16 de marzo de 2007.

²⁰⁵ Entrevistas de Crisis Group, Pasto, Tumaco, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Santa Marta, febrero y marzo de 2007. En muchas regiones, los líderes comunitarios no saben quiénes son los comandantes locales.

²⁰⁶ Crisis Group obtuvo copia de un documento de la policía que esboza el “Plan Integral”.

¹⁹⁸ Entrevista de Crisis Group, Medellín, 14 de febrero de 2007.

¹⁹⁹ Entrevista de Crisis Group, Medellín, 13 de febrero de 2007.

²⁰⁰ Entrevista de Crisis Group, Medellín, 29 de agosto de 2006.

Los Carabineros han identificado a los municipios vulnerables y en el 2006 construyeron quince nuevas estaciones de policía para reforzar la presencia del Estado²⁰⁷. Existen planes para construir otras 30 en el 2007, que incluyen zonas en donde hay presencia de nuevos grupos y corredores de droga utilizados por narcotraficantes. En Cúcuta, la policía estableció un bloque de búsqueda, una fuerza de despliegue rápido para combatir a los nuevos grupos, en este caso las Águilas Negras²⁰⁸. Ya ha tenido varios éxitos, con cinco muertos y 36 capturados desde febrero de 2007. Sin embargo, se le critica que sólo ha combatido a las Águilas Negras en sus niveles más bajos²⁰⁹.

Los infantes de marina en Tumaco (Nariño) han adaptado sus tácticas a la amenaza cambiante. Como los Rastrojos del Cartel del Norte del Valle (CNDV) están profundamente incrustados en la población civil y utilizan redes establecidas por el antiguo BLS de las AUC, las operaciones militares tradicionales resultaron infructuosas. Los Rastrojos se visten de civil y se confunden con las comunidades locales, por lo que los ciudadanos se muestran renuentes a cooperar debido a las amenazas abiertas que les hacen. Los infantes de marina utilizan ahora más técnicas de inteligencia entre la población, junto con operaciones terrestres y fluviales aleatorias y altamente móviles, con la esperanza de atrapar desprevenidos a los Rastrojos. En septiembre de 2006 capturaron a veinte miembros del grupo, y en la última semana de febrero de 2007 arrestaron a uno de sus líderes en Tumaco²¹⁰.

El ejército, incrementado por Uribe²¹¹, ha enviado nuevas unidades a regiones con una alta presencia de nuevos grupos y organizaciones criminales. En el departamento

de Norte de Santander, respondió a la desmovilización del Bloque Catatumbo (BC) en el 2004 aumentando el pie de fuerza y estableciendo la fuerza de operaciones especiales San Jorge, con 1.500 efectivos pertenecientes a las distintas armas y con inclusión de unidades de ingenieros, infantería y blindados. La Segunda División, responsable de la región, fue reforzada con 3.000 soldados adicionales entre el 2004 y el 2006²¹².

El ejército también ha patrullado activamente a lo largo de la costa Caribe y en la región de la Sierra Nevada. La cifra más alta de miembros de nuevos grupos muertos y capturados –230 en febrero de 2007– corresponde al Magdalena²¹³. El batallón de alta montaña “Mayor Daniel Robinson Ruiz” realiza patrullajes más aleatorios en la Sierra Nevada y los ha ampliado hasta zonas más bajas para frenar las rutas de tránsito. Las unidades anti secuestro elite del ejército (GAULA) trabajaron conjuntamente con la Fiscalía para capturar a un líder de las Águilas Negras en la península de la Guajira, un ex comandante de las AUC que no se desmovilizó²¹⁴. Las unidades de la Primera División, con sede en Santa Marta, también están trabajando muy activamente²¹⁵.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad no han podido controlar áreas como el Catatumbo, en Norte de Santander, en donde densas selvas y la proximidad de las montañas y la frontera venezolana dan a los nuevos grupos espacio para maniobrar. En la mayor parte de las regiones que visitó Crisis Group, se reportó repetidamente sobre cómo las fuerzas de seguridad toleran a los nuevos grupos armados y bandas criminales, o incluso a veces colaboran activamente con ellos²¹⁶.

Las fuerzas de seguridad saben muy bien la amenaza que plantea Vicente Castaño, un jefe paramilitar que no se desmovilizó. La policía cree que está reconstruyendo partes de las AUC en su antigua zona de influencia en la región de Urabá (Antioquia y Chocó). Se habla de reclutamiento, con epicentro en San Pedro de Urabá, inclusive de combatientes desmovilizados, a quienes se atrae con la oferta de un pago bastante superior al salario mínimo que ofrece el gobierno. Sin embargo, los planes de Castaño recibieron un duro golpe en abril de 2007 con la captura de Éver Veloza (“Hernán Hernández”), su

²⁰⁷ Se establecieron nuevas estaciones en Callejas (Córdoba); El Dos, Pie de Pepe y San Lorenzo (Chocó); San José de Oriente (la Guajira); La Mercedes, Buena Esperanza y Petrolea (Norte de Santander); Bocas de Pauta (Casanare); San Teodoro y La Venturosa (Vichada); Madrigales, El Ejido y La Esmeralda (Nariño) y El Tigre (Putumayo).

²⁰⁸ A comienzos de los años noventa se utilizaron bloques de búsqueda para ubicar a Pablo Escobar, del cartel de Medellín, y más recientemente también se utilizaron contra el cartel del norte del Valle (CNDV).

²⁰⁹ Entrevistas de Crisis Group, Cúcuta, 19 de febrero de 2007.

²¹⁰ Entrevista de Crisis Group, Tumaco, 2 de marzo de 2007; los archivos de la policía indican que Nolido Antonio Puente García (“Pedro”) fue capturado en Tumaco el 27 de febrero de 2007.

²¹¹ Entre el 2002 y el 2006, las fuerzas armadas y la policía aumentaron de 295.957 a 391.004 (sin contar el personal civil). Sin embargo, al incremento siguió un período de recortes. En enero de 2007, el personal total de las fuerzas armadas se había reducido a 382.266. “Logros de la política de consolidación de la seguridad democrática”, Ministerio de Defensa, marzo de 2007.

²¹² “Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo”, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, agosto de 2006.

²¹³ “Plan Integral”, *op. cit.*

²¹⁴ Carlos Reyes, “Capturado cabecilla de las ‘Águilas Negras’”, *El Heraldo*, 2 de marzo de 2007.

²¹⁵ Agustín Iguarán, “Abatidos 2 ‘Águilas Negras’”, *El Heraldo*, 24 de febrero de 2007.

²¹⁶ Véanse los estudios de casos en la Sección III, arriba.

mano derecha, ex jefe del Bloque Bananero de Urabá²¹⁷. Sin embargo, existe evidencia de que está ampliando sus esfuerzos hacia la costa Caribe y los Llanos Orientales, en especial en los departamentos de Casanare, Meta y Vichada, en donde solía operar su aliado Miguel Arroyave del Bloque Centauros. Arroyave se desmovilizó allí en septiembre de 2004 con 1.100 hombres, pero se cree que Castaño ha vuelto a tomar control de la zona²¹⁸.

El surgimiento de los nuevos grupos significa que se ha abierto otro frente en la guerra contra la droga, un elemento clave de la política del gobierno de Uribe. En esa lucha, el gobierno esgrime cuatro armas principales: erradicación de cultivos, interdicción, desmantelamiento de las organizaciones de narcotráfico y desarrollo alternativo. La meta de erradicación para el 2007 es de 210.000 hectáreas, 50.000 manualmente y el resto mediante fumigación aérea. Esta cifra es ligeramente inferior a la correspondiente al 2006, cuando se erradicaron 214.000 hectáreas²¹⁹. No obstante, pese a estas cifras sin precedentes y al decomiso de más de 139 toneladas de cocaína en el 2006²²⁰, la cantidad de droga que sale de Colombia permanece por lo menos constante²²¹.

B. JUSTICIA

El sistema judicial, crónicamente sobrecargado y notoriamente lento, afronta dificultades para reaccionar frente a la amenaza de los grupos emergentes y el crimen organizado al tiempo que se esfuerza en la implementación de la LJP²²². Crisis Group escuchó quejas recurrentes de funcionarios del sector judicial en varias regiones sobre sus precarias condiciones de trabajo y la insuficiencia de recursos para realizar investigaciones penales de manera eficaz y oportuna, así como sobre la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad. En departamentos como Nariño, Norte de Santander y Magdalena, se sentía un

temor omnipresente, en parte debido al historial de infiltración paramilitar en las instituciones estatales²²³.

No obstante, hay investigaciones importantes en curso, entre ellas los esfuerzos de la Corte Suprema por esclarecer los casos de los políticos vinculados con paramilitares. El escándalo de la “parapolítica” fue detonado por la captura, en el 2006, de lo que según parece era el computador de “Jorge 40”, y por las revelaciones de un ex funcionario del DAS hoy en día preso, Rafael García²²⁴. El escándalo se ha ido ampliando, con pruebas de acuerdos entre políticos y las AUC no sólo en la costa Caribe, sino también en el departamento de Antioquia²²⁵. El fiscal general está investigando acusaciones sobre la presunta asociación de Jorge Noguera, ex director del DAS, con paramilitares²²⁶. Los testimonios de miembros desmovilizados de las AUC, que hasta ahora están siendo llamados a declarar ante las cortes especiales de la LJP, también podrían aportar pruebas cruciales.

Las investigaciones han tenido un gran impacto en la política y en la actitud de la opinión pública. Desde hace mucho tiempo la corrupción forma parte de la vida política colombiana, pero la percepción de la opinión pública es que por primera vez se está enfrentando seriamente a la impunidad, con nueve congresistas activos y un ex congresista en la cárcel y varios otros sometidos a investigación²²⁷. Queda por ver hasta dónde llevará estos asuntos el sobrecargado sistema legal. Aunque la Corte Suprema está investigando muchos de los casos, la Fiscalía es el organismo encargado de conseguir pruebas y cuenta con recursos limitados. No

²¹⁷ “Detenido el jefe paramilitar Éver Veloza, ‘H.H.’, lugarteniente de Vicente Castaño”, *El Tiempo*, 3 de abril de 2007.

²¹⁸ Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 13 de marzo de 2007.

²¹⁹ “Colombia busca erradicar 210.000 hectáreas de coca”, Associated Press, 29 de enero de 2007.

²²⁰ “Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática”, Ministerio de Defensa, marzo de 2007.

²²¹ Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 16 de marzo de 2007. Después de la erradicación en el 2002, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reportó 144.000 hectáreas de coca listas para cosechar, la misma cifra que reportó en el 2005, pese al incremento en la erradicación. “International Narcotics Control Strategy Report”, Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2003 y 2006, en www.state.gov/inl/rls/nrcrpt/.

²²² Entrevistas de Crisis Group, Santa Marta, 11 de marzo de 2007.

²²³ Entrevistas de Crisis Group, Pasto, Tumaco y Santa Marta, febrero y marzo de 2007.

²²⁴ “Los crímenes de Don Antonio”, *Semana*, 21 de abril de 2007; “El computador de Jorge 40”, *Semana*, 3 de septiembre de 2006.

²²⁵ Sibylla Brodzinsky, “Colombia to expose militia’s reach”, *Christian Science Monitor*, 5 de diciembre de 2006; “Documentos que prueban otra reunión de políticos y ‘paras’ estarían en poder de la Corte Suprema”, *El Tiempo*, 22 de marzo de 2007; “El turno de Antioquia”, *Semana*, 14 de abril de 2007.

²²⁶ “Fiscalía niega que error suyo haya permitido libertad de ex director del DAS Jorge Noguera”, *El Tiempo*, 28 de marzo de 2007. Noguera fue puesto en libertad con base en un fallo procedimental de la Corte.

²²⁷ Los detenidos son los senadores Álvaro García, Jairo Merlano, Álvaro Araújo, Luis Eduardo Vives, Miguel de la Espriella, Mauricio Pimiento, Alfonso Campo y Dieb Maloof; el representante a la Cámara Eric Morris; y la ex representante Muriel Benito Revollo. Otro representante a la Cámara, Jorge Luis Caballero, se dio a la fuga y se cree que se oculta en España. Están siendo investigados por la Corte Suprema el presidente de la Cámara de Representantes Alfredo Cuello, los representantes Álvaro Morón y Mauricio Parodi, y el senador Rubén Quintero.

obstante, es muy probable que el escándalo haga que los políticos sean mucho más cautelosos en cuanto a relacionarse con grupos al margen de la ley o con sus proyectos políticos.

C. DE LA REINSERCIÓN A LA REINTEGRACIÓN

Pese a los evidentes problemas del programa de reintegración del gobierno, se ha exagerado la alarma sobre el rearme a gran escala de los ex combatientes. Según fuentes policiales, tan sólo el 17 por ciento de los 1.070 ex miembros de las AUC arrestados después de la desmovilización se había vinculado con nuevos grupos²²⁸. La mayor parte había cometido delitos menores, a menudo como integrantes de pequeñas bandas urbanas y semiurbanas que ofrecen un empleo más lucrativo que el estipendio que el gobierno adjudica a los desmovilizados²²⁹. Según varias fuentes, este tipo de “micro rearme” podría plantear un reto más difícil para la reintegración que el resurgimiento de grandes grupos armados²³⁰.

Sin embargo, no se puede hacer caso omiso de la presión que ejercen los nuevos grupos sobre los ex combatientes. La policía y la misión de la OEA han confirmado reclutamientos en Montería y Valencia (Córdoba), San Pedro de Urabá (Antioquia), San Martín y Acacías (Meta)²³¹, Bolívar y Nariño²³². También hay noticias sobre reclutamiento y presión sobre los ex combatientes en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena)²³³, en Cúcuta y Norte de Santander²³⁴ y en

Turbo (Antioquia)²³⁵. La policía ha registrado la muerte de 474 ex combatientes²³⁶, cifra que el alto consejero para la reintegración (ACR), Frank Pearl, cree que se acerca más al millar²³⁷. Las autoridades sostienen que estas muertes se relacionan en su mayor parte con actividades delictivas²³⁸, pero hay informes que demuestran que algunos asesinatos ocurridos en Barrancabermeja, Villavicencio, Cúcuta, Santa Marta, Barranquilla y Medellín fueron cometidos por sicarios y pueden estar vinculados con enfrentamientos entre nuevos grupos²³⁹.

Con el fin de minimizar el riesgo de que los ex combatientes retomen sus antiguos hábitos, el gobierno efectuó cambios importantes al programa de reintegración. Desde junio de 2006, se le encomendó a la policía monitorear las actividades de los ex combatientes y producir informes mensuales al respecto²⁴⁰. Tanto la policía como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) han establecido programas de protección para los ex combatientes²⁴¹. Aunque estos

que si no se unen se tienen que marchar de la localidad. Entrevistas de Crisis Group, Cúcuta, 19-20 de febrero de 2007.

²²⁸ Se ha reportado reclutamiento cerca del distrito El Dos, en el municipio de Turbo (Antioquia), en donde se desmovilizó el Bloque Bananero de las AUC. Entrevista de Crisis Group, Medellín, 13 de febrero de 2007.

²²⁹ “Noveno informe sobre el Ciclo de Seguimiento y Control a Desmovilizados”, Policía Nacional, 5 de marzo de 2007.

²³⁰ Entrevista con Frank Pearl, Caracol Radio, 14 de marzo de 2007.

²³¹ Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 13 y 28 de marzo de 2007.

²³² Según autoridades y ex combatientes en Barrancabermeja (Santander), las recientes muertes de quince paramilitares desmovilizados se produjeron como resultado de enfrentamientos entre nuevos grupos que buscan asumir el control sobre rutas y estructuras de narcotráfico. Felix Quintero, “Desmovilizados se rearmen en Barrancabermeja y sirven a narcotraficantes y traficantes de gasolina”, *El Tiempo*, 13 de marzo de 2007. “Preocupación por asesinatos de desmovilizados y taxistas en Villavicencio”, *El Tiempo*, 11 de diciembre de 2006; entrevistas de Crisis Group, Medellín, 13 de febrero de 2007, Barranquilla, 15 de febrero, Santa Marta, 11-13 de marzo.

²³³ La policía cruza información proveniente del ACR, la oficina del alto comisionado para la paz, inteligencia policial, el ejército, la Fiscalía y otras fuentes con el fin de evaluar la presencia y el perfil de ex combatientes en una región. A través de sus oficinas regionales y la red de policía comunitaria, visitan las residencias de los ex combatientes, monitorean sus actividades y organizan eventos para ellos. Estas actividades y visitas no necesariamente se realizan conjuntamente con el ACR. Además, la policía comunitaria se rota con frecuencia, con el fin de reducir la posibilidad de prácticas corruptas. Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 28 de marzo de 2007.

²³⁴ El programa de protección de la policía es manejado por los comandos regionales, los cuales, con la ayuda de los organismos de investigación e inteligencia de la policía, SIJIN

²²⁸ “Noveno informe sobre el Ciclo de Seguimiento y Control a Desmovilizados”, Policía Nacional, 5 de marzo de 2007.

²²⁹ Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 28 de marzo de 2007.

²³⁰ No es inusual que estas pequeñas bandas se identifiquen como ex AUC o como nuevos grupos armados al margen de la ley. Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 5 de febrero, 26 y 28 de marzo de 2007.

²³¹ Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 13 de marzo de 2007.

²³² La MAPP/OEA confirmó que el antiguo Frente Defensores de San Lucas, que pertenecía al Bloque Central Bolívar de las AUC, ha reclutado a combatientes desmovilizados y opera en Bolívar. Se han reportado casos similares en Nariño, en donde la ONG reclutó a ex combatientes del Bloque Libertadores del Sur. La MAPP/OEA también ha recibido información sobre el posible reclutamiento de ex combatientes por antiguos miembros del Bloque Norte de las AUC en el Cesar. “Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)”, OEA, 14 de febrero de 2007.

²³³ Entrevistas de Crisis Group, Santa Marta, 11-13 de marzo de 2007.

²³⁴ Según fuentes locales, a los ex combatientes les han ofrecido hasta US\$450 mensuales para que se incorporen a nuevos grupos armados al margen de la ley, y los amenazan diciéndoles

cambios han servido, los desmovilizados por lo general desconfían del contacto con las fuerzas de seguridad, sobre todo en regiones en donde existe una percepción generalizada de que existe colaboración o infiltración entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad²⁴².

Desde el establecimiento de la oficina del ACR el 9 de septiembre de 2006²⁴³, se ha extendido la ayuda económica a todos los ex combatientes que han cumplido los dieciocho meses iniciales del programa²⁴⁴, o que lo han abandonado pero quieren volverse a incorporar²⁴⁵. Después de que el ex jefe de las AUC Salvatore Mancuso alertó sobre el rearme de 5.000 ex combatientes, el ACR Pearl admitió, el 13 de febrero de 2007, que su oficina no conocía el paradero de 4.731 desmovilizados²⁴⁶, aunque un mes después dijo que cerca de 2.800 de los faltantes ya habían sido ubicados²⁴⁷.

y SIPOL, y de las autoridades judiciales, establecen el nivel de riesgo de los ex combatientes. Las medidas van desde entrenamiento en auto protección hasta protección policial y reubicación. Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 28 de marzo de 2007.

²⁴² Entrevistas de Crisis Group, Medellín, 14 de febrero, Cúcuta, 19 de febrero, Barranquilla, 15-16 de febrero, Santa Marta, 12 de marzo de 2007.

²⁴³ Aunque el gobierno anunció la creación de la oficina del Alto Consejero para la Reintegración el 8 de julio de 2006, sólo se estableció oficialmente el 9 de septiembre de 2006, mediante el decreto 3043. Ese mismo día Frank Pearl fue nombrado alto consejero para la reintegración mediante el decreto 3045. Véase Crisis Group, boletín informativo sobre América Latina N°11, *Mayores retos para Uribe en Colombia*, 20 de octubre 2006, pp. 8-9.

²⁴⁴ El 12 de julio de 2006, el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC), dirigido por el Ministerio del Interior y de Justicia, amplió la ayuda durante seis meses adicionales a los ex combatientes que habían completado su período inicial de dieciocho meses y todavía asistían a actividades, estaban empleados o desarrollaban algún proyecto productivo. "Extienden ayuda humanitaria a algunos desmovilizados de las AUC", Servicio de Noticias Estatales, 12 de julio de 2006.

²⁴⁵ Frank Pearl anunció la extensión de la ayuda humanitaria a ex combatientes que ya no forman parte del programa. El decreto gubernamental 395 del 14 de febrero de 2007 provee la base legal para la extensión de la ayuda humanitaria a ex combatientes hasta que el ACR juzgue completa su reintegración.

²⁴⁶ "Gobierno no tiene pista de 4.731 reinsertados, denuncia consejero para la reintegración, Frank Pearl", *El Tiempo*, 13 de febrero de 2007.

²⁴⁷ Según el ACR Pearl, cerca de 7.500 combatientes desmovilizados habían asistido a reuniones inter institucionales regionales ("brigadas") coordinadas por centros regionales de referencia y oportunidad (los CRO) hasta el 14 de marzo de 2007. Estas "brigadas" iban a continuar hasta mayo. Entrevista con Frank Pearl, Caracol Radio, 14 de marzo de 2007.

Pearl le enfatizó a Crisis Group que su plan se concentra en la reintegración en la sociedad, más que en la reinserción, que según explicó es más un alivio a corto plazo²⁴⁸. La nueva política busca solucionar algunas deficiencias importantes del programa actual²⁴⁹. Habrá una mayor descentralización, gracias al fortalecimiento de la red de Centros de Referencia y Oportunidad (CRO) regionales mediante la creación de 29 centros de servicio en 22 departamentos²⁵⁰. Se instará a las autoridades elegidas y a los sectores económicos para que participen en el diseño de proyectos que atiendan necesidades locales²⁵¹. Se hará un esfuerzo para hacer perfiles personales más precisos de los ex combatientes con el fin de ofrecer ayuda más efectiva²⁵², con énfasis en programas diferenciados para niños y jóvenes combatientes (hasta los 26 años) y para las esposas de ex combatientes²⁵³. Otro punto focal será la reintegración de ex combatientes como parte de sus comunidades, así como la reconciliación con las víctimas en un intento por mantener un equilibrio entre los beneficios ofrecidos a los ex combatientes y el derecho de las víctimas a la reparación²⁵⁴.

²⁴⁸ Entrevista de Crisis Group con el ACR Frank Pearl, Bogotá, 7 de diciembre de 2006.

²⁴⁹ El ACR dijo que la nueva política de reinserción se convertirá en parte del plan de desarrollo estatal cuando se incorpore al documento de política estatal CONPES en junio de 2007.

²⁵⁰ Los nuevos centros estarán en zonas con altas concentraciones de ex combatientes, serán autónomos y podrán ayudar con educación y capacitación, asistencia psicosocial y programas de generación de ingresos.

²⁵¹ El ACR, el Departamento Nacional de Planeación y la Organización Internacional para la Migración (OIM) han establecido comités inter institucionales regionales en Valledupar (Cesar), Montería (Córdoba), Sincelajo (Sucre), Bucaramanga (Santander), Santa Marta (Magdalena) y Cartagena (Bolívar). Estos comités se componen de representantes de las gobernaciones o alcaldías, del ACR, las cámaras de comercio locales y el sector privado. Analizan la viabilidad de las políticas y los proyectos de reinserción desde una perspectiva regional. Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 26 de marzo de 2006.

²⁵² Según la oficina del ACR, habrá 287 psicólogos en los centros de servicio, de modo que cada uno trate sólo a entre 120 y 150 ex combatientes, lo cual permitirá un diagnóstico y una asistencia más personalizados.

²⁵³ A las esposas de los ex combatientes se les proveerá asistencia especial, para impedir abusos. Se están haciendo perfiles especiales de las esposas de ex combatientes para ayudar a este respecto.

²⁵⁴ La OIM, el Departamento Nacional de Planeación y el ACR están desarrollando un índice para medir la reintegración socioeconómica de cada ex combatiente en su comunidad. El ACR está trabajando con el CNRR en el diseño de proyectos de reparación voluntarios.

Los retos son, sin embargo, formidables²⁵⁵. Los proyectos de generación de ingresos han sido insostenibles. Apenas el 26 por ciento de los combatientes desmovilizados tiene empleo²⁵⁶. El ACR manifestó que sólo 22 de los 152 proyectos que maneja el alto comisionado para la paz son viables²⁵⁷. La imposibilidad de conseguir trabajo, ya sea por falta de capacitación, preparación psicosocial, compromiso o escasez de demanda laboral, ha obligado a los ex combatientes a recurrir cada vez más a empleos informales²⁵⁸, y en algunos casos a reubicarse, dejando sus zonas rurales para mudarse a ciudades como Medellín y Barranquilla, con mercados laborales más dinámicos²⁵⁹. El ACR ha identificado puntos débiles en la provisión de ayuda básica: tan sólo el 28 por ciento de los combatientes desmovilizados recibe orientación, y apenas el 46 por ciento ha tenido acceso a cubrimiento básico de salud, el 23 por ciento a capacitación vocacional y el 10 por ciento a educación superior²⁶⁰.

Hay mucha frustración entre los ex combatientes: los de los bloques Bananero y Mineros han protestado en Urabá por la falta de seguridad y de oportunidades laborales, y por la estigmatización²⁶¹; los de Cúcuta, Medellín y Barranquilla también han protestado, y cada vez es más

difícil reunirlos para actividades²⁶². No se sabe cómo reaccionarán los ex combatientes, algunos de los cuales llevan más de dos años en el programa del gobierno, ante la amplia reforma propuesta por el ACR²⁶³. Para que la reforma funcione, habrá que implementar la transición rápida y eficientemente. Una fuente cercana al proceso de reintegración dijo: “Estamos avanzando en la dirección correcta a la velocidad equivocada”²⁶⁴.

Los ex combatientes de Bolívar y el Magdalena Medio, y de ciudades como Cúcuta, Medellín, Pasto²⁶⁵ y Santa Marta, han buscado trabajo en cooperativas de seguridad privadas, que algunas comunidades perciben como de mal augurio²⁶⁶. No cabe duda de que existe el riesgo de que algunos ex combatientes trabajen como informantes de bandas criminales al tiempo que participan en el programa del ACR.

También habrá que analizar minuciosamente el tratamiento diferenciado que reciben los comandantes de rango medio. En regiones como el Bajo Cauca, Medellín, Risaralda, Urabá y el Magdalena Medio, estos individuos, con el apoyo de sus antiguos jefes, han establecido organizaciones no gubernamentales que promueven sus propios proyectos agrícolas²⁶⁷. Aun cuando estos proyectos proveen posiciones potenciales de liderazgo

²⁵⁵ En la actualidad hay más de 43.000 ex combatientes: 31.670 desmovilizados colectivamente como resultado del proceso de negociación entre el gobierno y las AUC; 11.772 desmovilizados a título individual: 6.285 de las FARC, 3.548 de las AUC, 1.592 del ELN y el resto de otros grupos armados al margen de la ley.

²⁵⁶ “Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)”, OEA, 14 de febrero de 2007.

²⁵⁷ Se calcula que sólo 850-900 combatientes desmovilizados están empleados en la actualidad en estos proyectos. Frank Pearl, presentación durante la conferencia “El Proceso de Reinserción en Colombia”, organizada por Pax Christi, INDEPAZ y revista *Semana*, Bogotá, 7 de marzo de 2007.

²⁵⁸ Pese a los esfuerzos del Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC), no ha habido una reducción importante en las tasas de analfabetismo. En diciembre de 2006, fuentes gubernamentales le dijeron a Crisis Group que el 70 por ciento de los ex combatientes era funcionalmente analfabeta; el ACR Pearl anunció hace poco que cerca del 50 por ciento sigue siendo funcionalmente analfabeta. Conferencia “El Proceso de Reinserción en Colombia”, organizada por Pax Christi, INDEPAZ y revista *Semana*, Bogotá, 7 de marzo de 2007.

²⁵⁹ Entrevistas de Crisis Group, Medellín, 13 de febrero de 2007, Barranquilla, 15 de febrero.

²⁶⁰ Cálculos de Crisis Group a partir de cifras suministradas por el ACR con base en información del Sistema de Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación (SAME) del 30 de noviembre de 2006.

²⁶¹ María Paula González, “Reinserción: Proyectos ¿productivos?”, INDEPAZ, 13 de febrero de 2007; Carlos Salgado, “Ex combatientes del Bajo Cauca piden más seguridad”, *El Colombiano*, 22 de enero de 2007.

²⁶² Según se afirma, muchas quejas se manejan de manera informal y no se registran ni se les hace seguimiento. Entrevistas de Crisis Group, Medellín, 14 de febrero de 2007, Cúcuta, 19 de febrero, Barranquilla, 15 de febrero.

²⁶³ Algunos observadores temen que se presente una situación similar con contratistas vinculados para dar seminarios y servicios a ex combatientes, si no se les renuevan sus contratos. Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 15 de febrero de 2007.

²⁶⁴ Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 26 de marzo de 2007.

²⁶⁵ El alcalde de Pasto y representantes de los ex combatientes han acordado no emplear a combatientes desmovilizados como guardias de seguridad privados. “Alcalde de Pasto se reunió con Alto Consejero Presidencial para la Reintegración”, *Alcaldía de Pasto*, 19 de diciembre de 2006.

²⁶⁶ “Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)”, OEA, 14 de febrero de 2007; Entrevistas de Crisis Group, Medellín, 13 de febrero de 2007, Cúcuta, 19 y 21 de febrero, Santa Marta, 12 de marzo.

²⁶⁷ La Corporación Democracia en Medellín cubre a cerca de 4.150 ex combatientes, sobre todo de los bloques Cacique Nutibara y Héroe de Granada. Buscando Caminos Buenos, que maneja proyectos productivos en Risaralda, Bajo Cauca, Putumayo y Nariño, está compuesto en su mayor parte por ex combatientes del Bloque Central Bolívar. Semillas de Paz está conformado por miembros del BCB, el Bloque Caribe, Llanos y Catatumbo. Tarazá sin Hambre, una organización no gubernamental patrocinada por Cuco Vanoy, ex líder del Bloque Mineros, tiene proyectos productivos que benefician a más de 300 familias. “Jefes paramilitares detenidos en cárcel de Itagüí se autoproclaman ‘presos políticos’”, *El Tiempo*, 3 de abril de 2007.

para los comandantes, el gobierno no ha podido verificar cabalmente las finanzas y el estatus legal de la tierra que se está utilizando²⁶⁸.

Con el fin de consolidar un programa de reintegración más efectivo para los paramilitares desmovilizados en zonas rurales y obstaculizar la expansión de las FARC en áreas que fueron epicentro de violencia en el pasado, el gobierno debe invertir en proyectos de empleo de alto impacto en las comunidades rurales. Para evitar el resentimiento de otros elementos de la sociedad por los beneficios sociales que se les brindan a los reinsertados, también debe financiar al mismo tiempo proyectos de infraestructura y servicios que favorezcan a toda la comunidad. Aunque el grueso de ese dinero debe provenir del presupuesto nacional colombiano, un cambio en el destino de la financiación aportada por Washington –como propugnan muchos de los nuevos congresistas estadounidenses– en el que se reparta 50/50 entre ayuda militar y económica en vez de seguir con la distribución 80/20 de los últimos años, le permitiría a Colombia darle arranque a ese esfuerzo de infraestructura rural y proveer un apoyo más directo a los desplazados y a las familias de las víctimas en las comunidades rurales en donde se concentran el conflicto y la lucha contra los cultivos de droga.

D. PELIGROS FUTUROS

Ha transcurrido poco tiempo desde la desmovilización de los paramilitares, el surgimiento de nuevos grupos armados al margen de la ley y la consiguiente reconfiguración del panorama de violencia de Colombia, como para poder hacer una descripción exhaustiva de los retos planteados. Un punto de partida es que el conflicto con las FARC y el ELN continúa, y que el narcotráfico no se ha controlado. Estos son los parámetros dentro de los cuales evolucionarán los nuevos grupos y el crimen organizado. Por lo tanto, es prudente tomar en serio las advertencias según las cuales por lo menos algunos de los nuevos grupos podrían convertirse en organizaciones criminales semejantes a las AUC antes de su desmovilización, es decir, una federación de grupos armados ilegales que compiten con los insurgentes por el acceso criminal a recursos (económicos, políticos y sociales), con vínculos cada vez más estrechos con el narcotráfico y cierto grado de aquiescencia o apoyo de los militares y las élites locales. La respuesta del gobierno al problema ha sido lenta e insuficiente.

En materia de operatividad, pie de fuerza, liderazgo y finanzas, los nuevos grupos y sus socios criminales todavía no tienen el alcance que tenían las AUC. Tampoco tienen su ideología anti insurgente. Si bien en algunos casos sí

pelean contra la guerrilla (la ONG en Nariño), en otros trabajan en estrecho contacto con ella (los Rastrojos con el ELN en el Cauca) o han hecho acuerdos de narcotráfico (Vicente Castaño en Vichada con las FARC). Su objetivo parece relacionarse primordialmente con la droga, y las peleas suelen tener que ver con ese negocio ilícito y no con cuestiones ideológicas. Esto, sin embargo, representa la continuación de una tendencia que se detectó en la última época de las AUC, cuando el modelo anti guerrilla establecido por Carlos Castaño fue reemplazado por el narcotráfico.

En lo que respecta a los nuevos grupos, lo que difiere es su posición política y la percepción que tiene de ellos la opinión pública. El gobierno ha dicho que no recibirán ningún tipo de reconocimiento, sino que antes bien se les perseguirá como a criminales comunes. El escándalo de la paraparlítica ha menoscabado gran parte del apoyo que tenían las antiguas AUC. Las AUC habían disfrutado de un estatus casi legítimo en algunas regiones del país, en especial en sus bastiones de Antioquia, Córdoba y partes de la costa Caribe. Los nuevos grupos no tienen nada de esto y se los considera mafias.

Los jefes de las AUC reclusos en la cárcel de Itagüí han perdido la empatía que antes sentían por el Estado y el gobierno. El proceso de paz se desarrolló de maneras inesperadas. Incluso el gobierno se sorprendió cuando la Corte Constitucional volvió más severa la LJP en mayo de 2006; el escándalo de la paraparlítica también fue imprevisible. Los líderes de las AUC en Itagüí se sienten traicionados por Uribe y en especial por su comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Todos se lamentan y muchos dicen que preferirían estar de vuelta en las montañas combatiendo que en una celda²⁶⁹. Quienes aún andan sueltos ya no simpatizan con el gobierno y en muchos casos saben que su captura significaría un tiquete directo a una corte en Estados Unidos. Los comandantes en Itagüí han advertido sobre el rearme de grupos en diversas regiones del país y sobre el desarrollo de una “tercera generación” de paramilitares, mucho más peligrosos que sus predecesores²⁷⁰.

El negocio de la droga, con fondos gigantescos a su disposición, siempre ha reaccionado rápidamente ante las nuevas circunstancias, ideando métodos para burlar todos los obstáculos que las fuerzas de seguridad colombianas y estadounidenses interponen en su camino. Después del desplome de los carteles monolíticos de Medellín en 1993 y 1995, el narcotráfico se atomizó en “micro carteles” que se especializan tan

²⁶⁸ Entrevistas de Crisis Group, Medellín, 14 de febrero de 2007, Bogotá, 26 de marzo.

²⁶⁹ Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 15 de marzo de 2007, Itagüí, 30 de marzo.

²⁷⁰ Comunicado de Salvatore Mancuso, 4 de febrero de 2007; “Existe una ‘tercera generación de paramilitares más peligrosa’ que la que se desmovilizó”, *El Tiempo*, 23 de marzo de 2007.

sólo en uno o dos eslabones de la cadena. En la actualidad, existe el peligro de que el desmantelamiento de las AUC y el surgimiento de nuevos grupos presagie la atomización de las organizaciones criminales, con lo cual resultará más difícil combatir las, como sucedió después de la destrucción de los carteles de la droga.

Ya hay indicios de una serie de acuerdos entre la guerrilla, los micro carteles y ahora los nuevos grupos y el crimen organizado. Existe evidencia de que las organizaciones narcotraficantes están de acuerdo con dejar que las FARC controlen algunas zonas de cultivos. Las FARC no controlan las rutas de exportación y los mercados que tenían los carteles y las AUC, aunque parecen haber exportado cocaína directamente a México²⁷¹ y Brasil²⁷². Todos estos grupos comparten tres intereses comunes: que el negocio de la droga prospere para beneficio de todos, que se debilite el gobierno central y que se revoque el tratado de extradición con Estados Unidos. Esto podría ser la base para una alianza poderosa.

Las AUC comenzaron como una federación contra la guerrilla y evolucionaron hasta convertirse en una federación de narcotráfico cuya red paramilitar utilizaba traficantes de todo el país para hacer tratos y compartir embarques y rutas de droga. Si bien hay 59 líderes de las AUC recluidos, los actores clave del narcotráfico siguen libres; son hombres que han cooperado antes y que probablemente lo sigan haciendo, vinculándose con los nuevos grupos. También existen pruebas de que algunos de los desmovilizados recluidos en Itagüí siguen controlando actividades criminales, gracias a lugartenientes leales y a la relativa libertad de comunicación –celulares incluidos– que les permite el régimen carcelario²⁷³.

Encabezando la lista de quienes aún andan sueltos está Vicente Castaño, el “diplomático” de las AUC. Trabajó en el negocio de la droga con su hermano Fidel (quien se cree fue abatido en una emboscada de la guerrilla en 1994²⁷⁴), y luego actuó como agente e intermediario en negocios de narcotráfico, no sólo a nombre de las AUC sino también con carteles de droga²⁷⁵. Las autoridades de Estados Unidos consideran desde hace bastante tiempo a

los hermanos Mejía (Los Mellizos) como unos de los más prolíficos traficantes de Colombia²⁷⁶. Wilber Varela y Diego Montoya siguen en libertad, y son líderes del cartel del norte del Valle (CNDV), una organización narcotraficante “pura”; ninguno de ellos participó en las negociaciones entre el gobierno y las AUC. Montoya, en especial, colaboró estrechamente con las AUC, y vivió durante algún tiempo bajo su protección en el Magdalena Medio²⁷⁷.

Es probable que los nuevos grupos se fortalezcan en virtud de los ingresos procedentes de la droga y de otras actividades ilícitas. Dependiendo de la región en donde operen y de las redes criminales existentes, su evolución podría seguir uno de dos caminos: el modelo de las AUC, que permitió controlar exitosamente territorio, población, élites locales, rutas de droga, sitios de embarque y centros urbanos; o el modelo cartel, que ahora es primordialmente clandestino y busca acomodarse con las clases medias urbanas y algunas empresas legítimas, al tiempo que subcontrata violencia, transporte y distribución. Cada grupo nuevo cuenta con el respaldo de por lo menos una organización de narcotráfico, y en algunos casos actúa como su ala militar²⁷⁸. La suerte eventual de los jefes recluidos en Itagüí y la efectividad del “Plan Integral contra las Bandas Criminales” del gobierno determinarán el que los nuevos grupos desarrollen o no el poder militar abierto y el control social y económico que tuvieron las AUC. La diferencia podría ser que también se van a dedicar a combatir al Estado, quizás junto con elementos de la guerrilla.

Sin embargo, puesto que el conflicto con las FARC y el ELN persiste, es posible que algunos grupos nuevos adopten la postura contrainsurgente de sus predecesores de las AUC, actuando a favor de los intereses de las élites locales al luchar contra los rebeldes. Esto es más probable que ocurra en regiones en donde el Estado ha sido incapaz de proyectarse. Existe evidencia de grupos que utilizan uniformes y brazaletes como los de las AUC, y que lanzan al mismo tipo amenazas contra defensores de los derechos humanos, activistas de izquierda y líderes comunitarios. Esto es particularmente cierto en lo que respecta a la ONG en Nariño²⁷⁹, aunque sindicalistas de Santander también han recibido amenazas de muerte de las Águilas Negras²⁸⁰.

²⁷¹ Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 16 de enero y 16 de marzo de 2007.

²⁷² Existe el caso bien documentado del narcotraficante brasileño “Fernandiño” (Luiz Fernando da Costa), quien trabajó con el Bloque Oriental de las FARC y enviaba hasta 20 toneladas mensuales de cocaína a Brasil. “‘Fernandiño Beira’, el Pablo Escobar brasileño”, *El Espectador*, 20 de febrero de 2001.

²⁷³ Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 9 y 16 de marzo de 2007, Itagüí, 30 de marzo.

²⁷⁴ Mauricio Aranguren Molina, *Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos* (Bogotá, 2001), p. 17.

²⁷⁵ Jeremy McDermott, “Interview with Rodrigo 00”, BBC News, 22 de mayo de 2004.

²⁷⁶ “Los narcogemelos”, *Semana*, 3 de septiembre de 2001.

²⁷⁷ Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 16 de marzo de 2007.

²⁷⁸ Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 16 de marzo de 2007.

²⁷⁹ Carta abierta de los obispos Gustavo Girón Higuíta, Hernán Alvarado Solano y Fidel León Cadavid Marín, “Comunicado público de la Diócesis de Tumaco”, Tumaco, 26 de marzo de 2007.

²⁸⁰ “Águilas Negras amenazan a grupo de sindicalistas”, *Vanguardia Liberal*, 16 de febrero de 2007.

V. CONCLUSIÓN

La desmovilización paramilitar ha alterado el panorama de violencia y el curso del conflicto de 43 años de duración. Según el gobierno, uno de los actores armados –las AUC– ha sido retirado del conflicto, y los militares ya sólo tienen que combatir contra los grupos insurgentes FARC y ELN. El surgimiento, después de la desmovilización, de lo que el gobierno de Uribe denomina “bandas criminales” causa preocupación, pero a la policía se le ha encomendado manejar ese asunto, hasta el momento sin éxito. Aunque hay opiniones divergentes y sólo estimaciones aproximadas sobre la cantidad de grupos y de miembros de estos, es claro que el problema se ha ido intensificando desde que empezó la desmovilización de las AUC a fines del 2003. La OEA prendió las alarmas desde el 2006. Las organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y los centros de estudio colombianos han advertido insistentemente, y quizás un poco de manera simplista, que existe la modalidad paramilitar al igual que antes, y que se está formando una nueva generación de combatientes.

Las pruebas recabadas por Crisis Group sugieren que no existe sólo un tipo sino varios tipos de grupos armados ilegales emergentes o nuevos, pero con el denominador común de su participación en actividades criminales. Sin embargo, todavía es demasiado pronto como para saber si Colombia está presenciando el fracaso de la desmovilización y reintegración de las AUC y el resurgimiento de grupos paramilitares, o si está experimentando una reconfiguración del mundo criminal, incluida la atomización de actores que habían sido más o menos aglutinados por las AUC. Ambas posibilidades deben ser motivo de preocupación para todos los interesados en que Colombia alcance la paz y ponga fin a varias décadas de violencia.

La evidencia regional que se presenta en este informe hace pensar que las variaciones entre los nuevos grupos se explican mejor por (1) el grado en el cual la desmovilización de unidades individuales de las AUC fue efectiva, incluidos la suspensión de vínculos con paramilitares no desmovilizados y el desmantelamiento de las estructuras de mando; (2) la existencia de industrias y redes ilícitas, incluidos los grupos guerrilleros, en las regiones en donde se realizó la desmovilización y en donde están surgiendo nuevos grupos; (3) los nexos con las élites locales y las fuerzas armadas; y (4) la dinámica general del conflicto armado, incluida la lucha por el control de rutas y regiones estratégicas.

La ONG en Nariño es un ejemplo de un nuevo grupo que ha seguido actuando de modo muy semejante a como lo hacían los paramilitares. Después de la poco exitosa

desmovilización del regionalmente fuerte BLS, se calcula que cerca de la mitad de sus antiguos miembros se reincorporaron a grupos armados al margen de la ley. Debido a la fuerte presencia tanto de las FARC como del ELN en Nariño, la ONG está combatiendo a la guerrilla. La principal motivación de esta actividad “contrainsurgente” es sin duda el control sobre los cultivos de droga y los laboratorios de procesamiento, así como sobre las rutas de narcotráfico hacia el Pacífico y Ecuador. A las fuerzas del gobierno que realizan operaciones contra la guerrilla no parece preocuparles mucho la presencia de la ONG. La situación se ve exacerbada por la penetración de organizaciones narcotraficantes en Nariño, en especial los Rastrojos, que en la fase inmediatamente posterior a la desmovilización aprovecharon la oportunidad de desplazarse hasta el sur y han forjado una alianza con la ONG.

En la Guajira y en las laderas norteñas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el surgimiento de grupos parece operar con una lógica similar. Varios comandantes de rango medio se negaron a desmovilizarse y prosiguieron sus actividades con un grupo reducido pero muy compacto de subordinados. Otros retomaron las armas poco después de que se desmovilizaron sus bloques. Aunque sus contingentes son pequeños en comparación con los grupos del Bloque Norte (BN) que se desmovilizaron en 2005-2006, tienen mucha capacidad para reclutar a combatientes desmovilizados. Operan en una región que brinda oportunidades lucrativas de todo tipo de contrabando, incluidas cocaína y gasolina venezolana. En Maicao, una ciudad tradicionalmente conocida por sus actividades de contrabando, han emergido otros grupos nuevos más pequeños liderados por comandantes de rango medio rearmados, y que han adoptado el nombre de Águilas Negras. La mayor parte de los miembros de estos grupos no son oriundos de la Guajira y están en pugna con los grupos étnicos wayúu que quieren recuperar el control sobre el contrabando. Hay presencia de las FARC entre la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá, a lo largo de la frontera venezolana. Las fuerzas de seguridad no han podido consolidar el control en la región.

En Norte de Santander, la situación de las Águilas Negras es diferente. El Bloque Catatumbo (BC) nunca tuvo el predominio casi total que el BLS sí tuvo en Nariño: las AUC y las FARC se dividían el territorio. Aunque las AUC establecieron una fuerte presencia en Cúcuta, esta estratégica zona fronteriza era y sigue siendo epicentro de varias otras redes criminales que trabajan con miembros de la élite local y se lucran con todo tipo de contrabando a través de la frontera con Venezuela. Las AUC no trataron de absorber a estas organizaciones criminales, sino sólo de subordinarlas. La desmovilización del BC fue más efectiva que la del

BLS en Nariño, y el “bloque de búsqueda” del gobierno ha tomado medidas fuertes contra las Águilas Negras.

Como consecuencia, estos nuevos grupos están operando, no como los paramilitares tradicionales, sino forjando alianzas *ad hoc* con otros grupos criminales, aunque esto no ha excluido las guerras territoriales. Las Águilas Negras no pelean contra las FARC, que han retomado la región del Catatumbo, pero intentan asumir el control en los barrios cucuteños y en algunas zonas rurales mediante la intimidación de los residentes. Sin embargo, la aparente intención de Vicente Castaño, un jefe de las AUC todavía libre, de quitarles a las FARC el control de una carretera estratégica en la región de La Gabarra podría ser el inicio del resurgimiento de un grupo paramilitar de estilo tradicional en Norte de Santander.

Tal parece ser que en Medellín no han surgido nuevos grupos armados, pero las redes criminales mafiosas relacionadas con la droga que existen allí desde hace decenios continúan, presuntamente bajo las órdenes de “Don Berna”, líder de las AUC hoy en día recluido en la cárcel. Los antiguos grupos paramilitares ya no son visibles, pero siguen ejerciendo control. La efectividad de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (BCN) en el 2003 ha sido cuestionada, pero la Alcaldía se ha esforzado notoriamente por lograr que funcione la reintegración. Por otra parte, las fuerzas de seguridad del gobierno expulsaron a las milicias guerrilleras, aunque aparentemente allanando con ello el camino para la ocupación paramilitar.

La respuesta del gobierno a la creciente amenaza de los nuevos grupos armados ilegales ha sido inadecuada. El tildarlos de bandas criminales no le hace justicia a la complejidad del fenómeno. Aunque sin duda existe un fuerte elemento criminal y narcotraficante en todos los grupos, la abundante evidencia recogida por Crisis Group sugiere que son de tipos diferentes, por lo cual exigen respuestas distintas. Existe, desde luego, el peligro de que emerjan grupos paramilitares como los que había antes, pero también se cierne la amenaza de la conformación de una nueva federación de organizaciones criminales y narcotraficantes, quizás conjuntamente con algunos elementos de las FARC y el ELN.

Una de las principales dificultades que plantea el control sobre estos grupos es que la presencia del Estado en muchas regiones sigue siendo precaria. Aunque las fuerzas de seguridad son ahora más numerosas y más activas, existen dudas sobre su efectividad en cuanto a recuperar el control de zonas antes dominadas por las AUC, y sobre su compromiso en la lucha contra los nuevos grupos armados. El gobierno está claramente empeñado en combatirlos –la creación de un “bloque de búsqueda especial” en Cúcuta así lo demuestra– pero las

FARC son el principal objetivo de la estrategia militar y con frecuencia las fuerzas de seguridad se hacen las de la vista gorda frente a los grupos emergentes. La situación es exacerbada por la escasez de recursos –y en algunos lugares por el temor reinante– que les impide realizar bien sus funciones. Crisis Group escuchó muchas quejas amargas de funcionarios de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre ellas la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad en sus investigaciones.

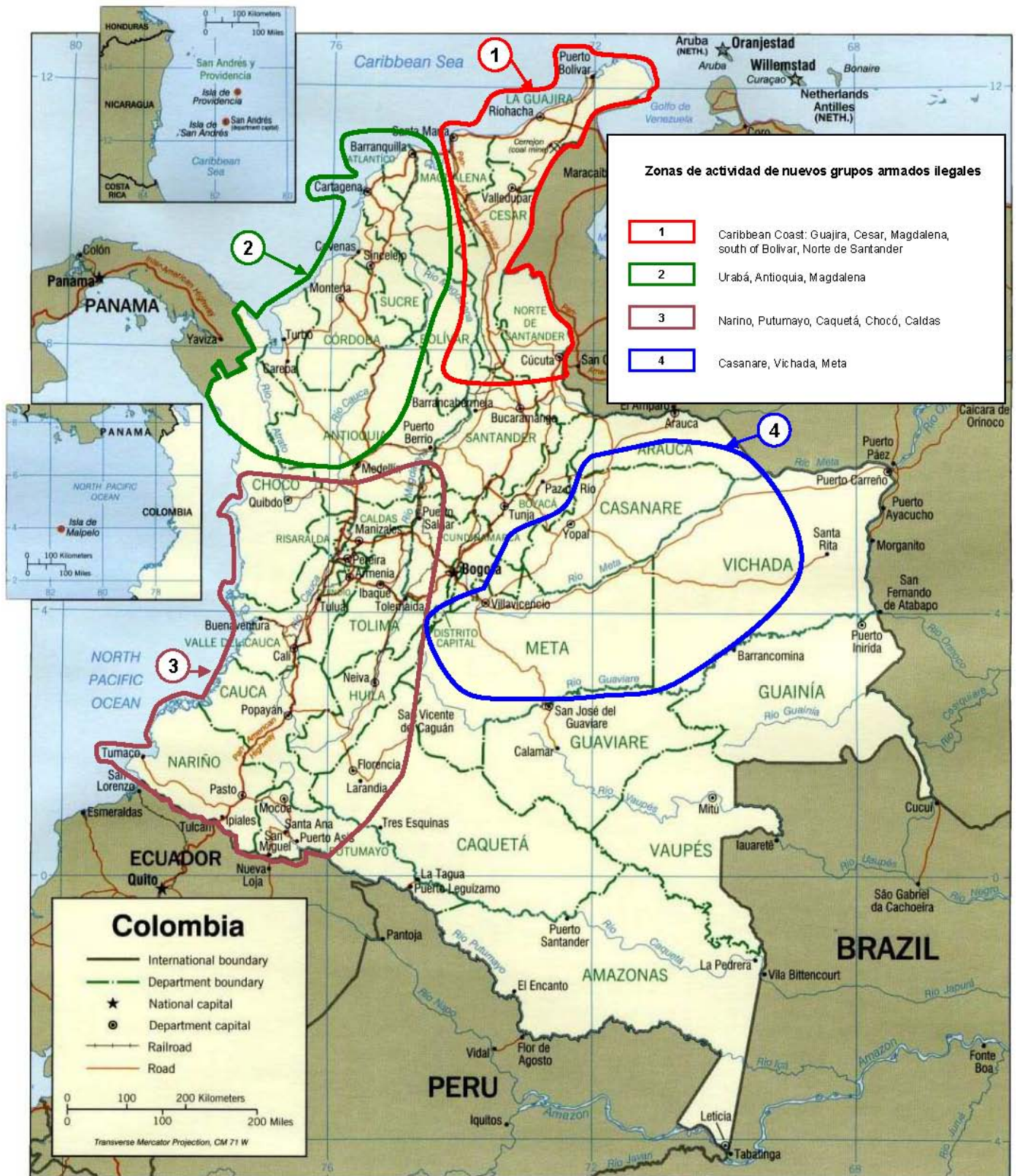
El programa de reintegración ha afrontado deficiencias serias. Aunque sólo una minoría de los miembros de los nuevos grupos son combatientes desmovilizados, y el programa está siendo profundamente reestructurado por el alto consejero para la reintegración, el gobierno trabaja contra el tiempo. En la medida en que los paramilitares abandonen el programa sin empleos, el riesgo de que retomen actividades delictivas aumenta. No hay un programa de respuesta rápida y alto impacto que ofrezca a las comunidades rurales opciones económicas ligadas a la seguridad, inversión en infraestructura, servicios y gobernabilidad.

Es esencial diseñar e implementar una estrategia integral para confrontar a los grupos emergentes y a las organizaciones criminales. Esto exige una acción más efectiva de las fuerzas del orden, una acción militar con mejores labores de inteligencia y un mejoramiento en el programa de reintegración, junto con un fortalecimiento de la gobernabilidad a nivel comunitario que le permita al gobierno, conjuntamente con la sociedad civil y el sector privado, actuar de manera más efectiva –y rápida– para afrontar los retos de la post desmovilización.

Bogotá/Bruselas, 10 de mayo de 2007

ANEXO A

MAPA DE COLOMBIA CON ZONAS DE ACTIVIDAD DE NUEVOS GRUPOS



Con base en un mapa de The General Libraries, The University of Texas, Austin